

TERCERA PARTE

METAS ALCANZADAS

POR LA

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

INDICE

	<u>Página</u>
FORMACION DE LA UNION ADUANERA.....	1
1) Desarme arancelario.....	1
2) Arancel Aduanero Común.....	3
3) Restricciones cuantitativas comunitarias.....	8
LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS Y POLITICA SOCIAL.....	11
1) Liberalización del derecho de establecimiento y de los servicios.....	11
2) Libre circulación de personas.....	13
3) Política social.....	17
POLITICA AGRICOLA COMUN.....	17
1) Introducción.....	17
2) Elaboración de la política agrícola común.....	21
3) Regulación agrícola.....	22
4) Efectos de la política agrícola común.....	37
5) Acciones del FEOGA - Sección Orientación.....	38
6) Objetivos de la política agrícola común.....	40
POLITICA PESQUERA COMUN.....	45
1) Política de mercado.....	46

II

	<u>Página</u>
2) Política estructural.....	48
3) Conservación y gestión de recursos.....	52
4) Relaciones con terceros países y con organizaciones internacionales.....	53
5) Acuerdos del 30 de Sertiembre de 1981.....	54
 INTEGRACION FINANCIERA.....	 55
1) Libre circulación de capitales.....	55
2) Sociedad anónima europea y armonización contable.....	56
3) Armonización fiscal.....	58
4) Sistema Monetario Europeo (SME).....	62
 INTEGRACION FISICA.....	 64
1) Política común de transporte.....	64
2) Política de desarrollo regional.....	68
3) Medio ambiente.....	73
 COMPETENCIA Y CONSUMIDORES.....	 83
1) Política de competencia.....	83
2) Consumidores.....	86
 POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGETICA.....	 88
1) Política industrial común.....	88

III

	<u>Página</u>
2) Política energética común.....	99
BIBLIOGRAFIA.....	113

FORMACION DE LA UNION ADUANERA

La creación del Mercado Común implicaba la construcción de la Unión Aduanera, que se realizó mediante la supresión de las barreras arancelarias intracomunitarias (desarme arancelario), con el paralelo establecimiento de un Arancel Aduanero Común y con la supresión de restricciones cuantitativas.

1) Desarme arancelario

Los negociadores del Tratado de Roma fijaron un período mínimo de doce años (extensible a quince) para realizar el desarme arancelario entre los Estados Miembros, es decir, la supresión de los "derechos de importación" practicados por Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

En el Tratado se previó que en la primera etapa se rebajaría un 30,0%, otro 30,0% en la segunda y el resto en la tercera. En otras palabras, dentro de cada una de las dos primeras etapas, las rebajas arancelarias habrían de hacerse fraccionándolas en tres fases del 10,0% cada una.

Además de los derechos de aduana a la importación, en el Tratado de Roma se previó la supresión paralela de los "impuestos de efecto equivalente a los de aduana".

También se previó la eliminación de los "impuestos de carácter fiscal percibidos en frontera", pero en vez de suprimirse, pudieron convertirse en impuestos indirectos, siempre que ello no significase una discriminación o protección encubierta.

En cuanto al desmantelamiento de los "derechos de exportación", éste quedó completamente resuelto al término de la primera etapa.

El sistema de reducciones arancelarias intracomunitarias se vió muy flexibilizado con la "cláusula de aceleración", conforme a la cual los Estados Miembros se declararon dispuestos a reducir sus derechos de aduanas respecto de los otros Estados Miembros a un ritmo más rápido, siempre que su situación económica general y la situación del sector interesado se lo permitiesen. La cláusula indicada se hizo uso en tres oportunidades.

La primera de ellas, el 31 de Diciembre de 1960, cuando se llevó a cabo una rebaja no prevista de un 10,0% para todos los productos industriales y del 5,0% para los productos agrícolas no liberados, para los cuales la producción cuantitativa parecía suficiente. Con ello, al terminar la primera etapa, en vez de haberse alcanzado un nivel general de rebajas, con respecto a los derechos-base, del 30,0%, se llegó al 40,0% en los productos industriales, al 35,0% en los productos agrícolas no liberados y al 30,0% en los productos agrícolas liberados.

El 1 de Julio de 1962 nuevamente se hizo uso de la cláusula de aceleración, para rebajar un 10,0% los aranceles de los productos industriales y un 5,0% los de algunos productos agrícolas liberados que no habían sido afectados por la aceleración de 1960. La situación al 1 de enero de 1965 era la siguiente: reducción del 70,0% en los productos industriales, del 50,0% en los productos agrícolas liberalizados y del 55,0% en los productos agrícolas no liberalizados.

Finalmente, la tercera y última aceleración se produjo el 1 de Julio de 1968, llegándose de este modo al total desarme arancelario intracomunitario para los productos industriales. Para los productos agrícolas, las rebajas pendientes se instrumentaron a través de los correspondientes reglamentos.

2) Arancel Aduanero Común

En el proceso de constitución de la Unión Aduanera, al tiempo que se suprimían los derechos arancelarios intracomunitarios, se establecía un Arancel Aduanero Común, conocido en los medios internacionales con la sigla TEC (Tarif Extérieur Commun), que habría de situarse en torno a los Seis países de la Comunidad. En el momento de ser firmado el Tratado de Roma, el Arancel Aduanero Común estaba aún sin confeccionar, pero sí quedaron sentadas las bases del procedimiento para constituirlo, así como sus principales excepciones.

En la confección de la TEC se plantearon dos tipos de problemas: la nomenclatura y el nivel de los derechos. Las cuestiones suscitadas en lo relativo a la nomenclatura no plantearon dificultades verdaderamente graves, ya que desde 1950, fecha de creación del Consejo de Cooperación Aduanera, los cuatro territorios aduaneros más tarde componentes de la Comunidad Económica Europea ya habían adoptado la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB).

Por la razón indicada, el primer paso para la elaboración de la nomenclatura de la TEC fue la imbricación de las subpartidas de las cuatro tarifas preexistentes (Francia, la República Federal de Alemania, Italia y Benelux -Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo-), para formar una estructura con casi 20.000 posiciones arancelarias. A partir de esa estructura, y tras un largo proceso de simplificación, se llegó a una nomenclatura que, con 2.893 posiciones solamente, resultó aceptable para los Seis Estados Miembros.

Si la cuestión de la nomenclatura no requirió más que un minucioso trabajo técnico, por el contrario, el nivel de los derechos del Arancel Aduanero Común motivó el

establecimiento dentro del Tratado de Roma de una regla general de confección y de varias excepciones importantes.

La regla general fue bien sencilla: los derechos de la TEC se situarían al nivel de la media aritmética de los derechos aplicados en los cuatro territorios aduaneros de la Comunidad el 1 de Enero de 1957.

Por derecho aplicado se entendió el legalmente vigente, y no el efectivamente aplicado, ya que en Enero de 1957, algunos países del Mercado Común tenían reducidos temporalmente sus derechos, a pesar de lo cual, para la confección de la TEC se tomaron como base los derechos legales, a fin de aumentar el grado de protección del Arancel Aduanero Común frente a terceros.

Además es interesante destacar que, a los efectos arancelarios, en 1957 los tres países del Benelux ya formaban un solo territorio aduanero.

Las excepciones establecidas junto a la regla general de construcción de la TEC podemos clasificarlas en cuatro grupos:

- Excepciones derivadas de las modificaciones introducidas en el arancel italiano, ya que poco antes de firmarse el Tratado de Roma Italia elevó en un 10,0% su arancel, con el doble objetivo de partir de un nivel más alto en el desarme arancelario frente a los demás Estados Miembros y de "pesar más" en la confección de la TEC.

- Excepciones provenientes de la elevación de derechos para ciertos productos (químicos, textiles, maquinaria, etc. del arancel francés), exclusivamente con vistas a promover un mayor nivel de protección en la TEC para aquellos artículos en los cuales Francia se sentía en peores condiciones de competir frente a terceros.

- Excepciones debidas al interés de los países menos proteccionistas (la República Federal de Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo). En este sentido, se acordó que los derechos de la TEC no podrían ser mayores del 3,0% para las materias primas minerales y vegetales, del 10,0% para una serie de productos semitransformados y del 15,0% para algunos productos químicos.

- Finalmente, de común acuerdo los Seis elaboraron una lista con los derechos definitivos que tendrían en la TEC los principales productos agrícolas, derechos que en general eran muy superiores a la media aritmética, apareciendo de esta manera el primer indicio del fuerte proteccionismo que el Tratado habría de dispensar a la agricultura. Este proteccionismo se acentuó más en otra lista, que incluyó principalmente un gran número de productos agrícolas en los cuales no pudo llegarse a un acuerdo antes de firmar el Tratado. Para estos productos se realizó una larga negociación de la cual surgieron derechos relativamente altos.

En el Tratado de Roma se previó la gradual aproximación de los aranceles de los cuatro territorios aduaneros a la TEC, siguiendo varias reglas de una gran sencillez.

Para cada posición arancelaria, la diferencia -en más o en menos- entre el derecho vigente en cada arancel nacional el 1 de Enero de 1957 y el establecido en la TEC, se reduciría en un 30,0% al final de la primera etapa, en otro 30,0% al término de la segunda, para quedar plenamente alineado con el Arancel Aduanero Común, lo más tarde, al final del período transitorio.

De hecho, la cláusula de aceleración también afectó a este aspecto de la Unión Aduanera.

La primera aproximación de los aranceles nacionales a la TEC se operó en dos fases: el 31 de Diciembre de 1960 para todos los productos no agrícolas y el 31 de Diciembre de 1961 para los productos agrícolas. Para los primeros se tomó como base de cálculo los derechos de la TEC reducidos en un 20,0%, pensando en la eventual reducción de la misma como consecuencia de las negociaciones en curso en el GATT.

La segunda aproximación, también en virtud de la aceleración, entró en vigor el 1 de Julio de 1963, es decir, con dos años y medio de adelanto sobre lo previsto en el Tratado, y análogamente a lo observado en las actuaciones del desarme arancelario, esta aproximación a la TEC no afectó a los productos agrícolas. Ante la posibilidad de nuevas negociaciones arancelarias, las modalidades de esta aproximación fueron parecidas a las de la primera, es decir que la base de cálculo fue la misma, o sea la TEC disminuida en un 20,0%.

Finalmente, la tercera aproximación coincidió con el perfeccionamiento del desarme arancelario intracomunitario llevado a cabo el 1 de Julio de 1968.

Una vez establecido el Arancel Aduanero Común, la Comisión de la Comunidad Económica Europea adquirió plena soberanía en lo referente a "contingentes arancelarios" libres de derecho, o con un derecho más reducido que el de la TEC, en favor de determinadas mercancías y sin discriminación posible entre países.

La concesión de esos contingentes quedó rigurosamente determinada y la justificación de los mismos también era rigurosa: debía basarse en el carácter tradicional de los suministros, en que existían perjuicios visibles como consecuencia de un cambio en las fuentes de aprovisionamiento y en que la producción comunitaria era

insuficiente para cubrir todas las necesidades internas, pudiendo ello causar perjuicios a una industria transformadora o al consumidor.

La aplicación de la TEC en las fronteras exteriores de los Seis planteó una serie de problemas de orden técnico, cuya resolución acometió la Comunidad a través de un amplio Programa de Aproximación de la Legislación Aduanera.

Este Programa, que tendió a uniformar la incidencia de la TEC en los seis países de la Comunidad, abarcó fundamentalmente los siguientes aspectos: elaboración de unas "notas explicativas" para la aplicación correcta y uniforme del Arancel Aduanero Común, fijación de "reglas comunes" para la determinación del valor en aduana sobre la base de la Convención del Valor (Bruselas, 1950), "lista común de franquicias" aplicables por los seis países debido a diversas razones económicas, definición del "origen de las mercancías", elaboración de una "legislación antidumping" comunitaria frente a terceros países y "reembolso de derechos de aduana" percibidos sobre mercancías devueltas por los importadores.

Las Partes Contratantes del GATT, son la única instancia internacional que puede enjuiciar si una Unión Aduanera ha sido constituida sin comportar un aumento global de la protección arancelaria, que pueda originar distorsiones graves en el comercio mundial.

La TEC de la CEE fue puesta a prueba en negociaciones internacionales por primera vez en 1963, en la Quinta Conferencia Arancelaria del GATT, y como consecuencia de ello, quedó con una protección media (aritmética) del 11,7% ad valorem por debajo del 17,8% de la tarifa de los Estados Unidos y del 18,4% del Reino Unido.

Como consecuencia de la Sexta Conferencia Arancelaria del GATT, en 1967, los derechos de la TEC para los productos no agrícolas experimentaron una nueva reducción del 35,0% al 40,0% sobre su nivel y tras varias, fases entraron plenamente en vigor el 1 de Enero de 1972. De acuerdo a ello, los derechos de una serie de bienes duraderos quedaron a un nivel muy bajo.

Más adelante, entre 1973 y 1980, en ocasión de la Séptima Conferencia Arancelaria del GATT, la TEC aún experimentó nuevas reducciones que, como promedio, representaron para los productos industriales una rebaja del 30,0% situándose el promedio industrial en el 7,5% ad valorem.

En definitiva, no puede decirse que la CEE sea un área proteccionista o autárquica desde el punto de vista arancelario, por lo menos en lo que respecta a los productos no agrícolas. Sin embargo, existen otras importantes barreras, como ser las normas técnicas, la vigilancia de precios, etc., que en las épocas de depresión pueden llegar a suponer un proteccionismo efectivo considerable.

3) Restricciones cuantitativas intracomunitarias

Para lograr la libertad de circulación de mercancías entre los Seis, fueron precisos dos dispositivos adicionales: el desarme contingentario y la reglamentación de la producción y el comercio de productos agrícolas.

El desarme contingentario suprimió las restricciones cuantitativas que impedían las transacciones o que las limitaban a topes previamente fijados.

A pesar de ser análogos los procedimientos del desarme arancelario y del contingentario, las bases de partida eran

reducciones arancelarias todo estaba por hacerse, en lo referente a los contingentes ya era mucho lo avanzado a escala europea en el marco de la OECE.

Como primera medida, habían de globalizarse los cupos bilaterales todavía existentes entre los Estados Miembros un año después de entrar en vigor el Tratado.

Ulteriormente, el volumen total de esos cupos globales se elevaría año a año en un 20,0%, si bien, como en el caso del desarme arancelario, se dió la posibilidad de seleccionar las partidas a incluir en los aumentos en función de la sensibilidad de las mercancías afectadas, siempre con la condición de cumplir un mínimo obligatorio en cada uno de los cupos globales de un 10,0% anual. Al final de los diez años de funcionamiento del Tratado, todos los contingentes globales deben suponer como mínimo un 20,0% de la producción nacional.

Respecto de las mercancías para las cuales el 1 de Enero de 1959 no había cupos bilaterales, o cuando la suma del valor de ellos era inferior al 3,0% de la producción nacional, es decir, para las mercancías más sensibles a la competencia recíproca, el procedimiento establecido en el Tratado era mucho más lento, a fin de amortiguar los efectos de la liberación.

A tales propósitos obedecía la fijación de una base de partida de cupos globales iguales al 3,0% de la producción nacional. Al año siguiente, esos cupos globales se habrían de elevar al 4,0% y al 5,0% un año después, siempre en términos de tanto por ciento de la producción nacional en el año inmediato anterior.

En la segunda y tercera etapas, los contingentes globales del 5,0% de la producción nacional en 1961 se

habrían de ampliar anualmente, como mínimo, en un 15,0% de su valor con respecto al año precedente.

En el Tratado se previó también la eliminación de los contingentes que no contasen con una verdadera razón de ser, es decir, que en el caso de comprobar la Comisión que la importación de un producto en el curso de dos años consecutivos resultase inferior al contingente abierto, este contingente global podía suprimirse.

Finalmente, se incluyeron en el Tratado tres cláusulas paralelas a las que ya se han visto para los aranceles: cláusula de salvaguardia, que admitía la posibilidad de mantener ciertas restricciones, supresión de las restricciones cuantitativas a la exportación, lo más tarde, al final de la primera etapa y cláusula de aceleración.

El ministro belga de Asuntos Exteriores, señor Wigny, presentó una propuesta a los países de la CEE el 9 de Octubre de 1959, a efectos de acelerar el desarme contingentario. De acuerdo a ello, en su sesión del 12 de Mayo de 1960, el Consejo de Ministros de la CEE decidió:

- Suprimir el 31 de Diciembre de 1961 todas las restricciones cuantitativas intracomunitarias para los productos industriales.

- Aumentar en 1961 cada uno de los contingentes globales de producción agrícola en un 20,0%, para hacerlos llegar el 1 de Enero de 1961, como mínimo, al 5,2% de la producción nacional, en vez de al 5,0% establecido en el Tratado.

- Establecer la posibilidad de importar los productos agrícolas no incluidos en ningún cupo global, por lo menos en una cifra igual a la media de importaciones 1955-1957,

aumentada en un 10,0% para cada uno de los años 1959, 1960 y 1961.

- Conectar la cuestión de los contingentes de productos agrícolas con la redacción de los oportunos reglamentos agrícolas.

La decisión de acelerar que se adoptó el 12 de Mayo de 1960, supuso la casi plena resolución de los problemas de contingentación comercial de productos industriales dentro del área de la CEE. Se eliminaron prácticamente todas las trabas a partir del 1 de Enero de 1962, y con ello el grueso del problema de los contingentes de productos agrícolas se transfirió a la elaboración de una política agrícola común.

LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS Y POLITICA SOCIAL

1) Liberalización del derecho de establecimiento y de los servicios

El Programa General de Establecimiento fue oficialmente adoptado por el Consejo en su sesión del 25 de Octubre de 1961, pero sólo constituyó un cuadro general a partir del cual habrían de emanar directivas específicas sobre actividades concretas. El núcleo del programa consistía en una enumeración de las distintas actividades, dividida en cuatro partes correspondientes a cuatro fases de liberalización.

- Antes del final del segundo año de la segunda etapa, debieron quedar libres las actividades mineras e industriales en general, crédito y banca, reaseguros, locales cinematográficos especializados en la proyección de películas en el idioma del país de origen del ciudadano que se establece, etc.

- Antes de la segunda etapa, las actividades conexas a la agricultura (incluyendo los ingenieros agrónomos), industrias alimentarias y bebidas, comercio al por menor, seguros directos (excepto los de vida), actividades profesionales liberales o no, hotelería, etc.

- Al final del segundo año de la tercera etapa, los veterinarios y centros sanitarios para animales, pesca, prospección y sondeos petrolíferos, seguros de vida, transportes (salvo casos exceptuados expresamente), servicios sanitarios, institutos científicos, servicio doméstico, etc.

- Al final del período transitorio, la silvicultura, caza, construcción naval, construcción de material ferroviario, comercio ambulante, enseñanza, distribución y proyección de toda clase de películas cinematográficas, etc. Casos especiales son las obras públicas, algunos transportes y la agricultura, que quedaron para regular a través de disposiciones especiales.

En lo que respecta a la libertad de establecimiento de las profesiones que requieren diplomas particulares y especialmente de las profesiones liberales, existe libertad de ejercicio y de establecimiento profesional en la mayoría de las profesiones médicas (médicos, enfermeros, dentistas y veterinarios), y en cuanto a los abogados pueden defender pleitos en toda la Comunidad.

Las restricciones a la libre circulación de servicios se suprimieron progresivamente a lo largo de todo el período transitorio, incluyendo toda clase de actividades industriales, comerciales, artesanales y liberales, realizadas dentro de la Comunidad por ciudadanos o personas jurídicas de un Estado Miembro establecidos en un país distinto del destinatario de la prestación.

La supresión de las restricciones existentes se realizó de acuerdo con un Programa General que se aprobó el 25 de Octubre de 1961 y, como en el caso de la liberalización del derecho de establecimiento, fue el cuadro del cual emanaron las correspondientes directivas específicas para liberalizar el servicio en concreto.

En lo referente a las restricciones en los servicios, se adoptó el principio de que en cada sector en concreto, las restricciones existentes deberían ser abolidas, lo más tarde, en el momento de realizarse la operación paralela conforme al Programa de Establecimiento.

2) Libre circulación de personas

Salvo razones de orden público y sin necesidad de pasaporte, los ciudadanos de la Comunidad pueden circular libremente de un país a otro y establecerse en el país que elijan para desempeñar su trabajo, salvo en el caso de España y Portugal, cuyos trabajadores sólo podrán hacerlo al final del período transitorio en 1993.

Por más que ocasionalmente aún haya que sufrir algunas esperas en los puntos fronterizos, las trabas administrativas han disminuido. Por otra parte, los turistas a la vuelta a sus países de origen pueden llevar consigo, sin pagar impuestos suplementarios, una cantidad apreciable de bebidas, tabaco, perfumes y otros productos, y si enferman durante su estancia en otro país de la Comunidad, pueden conseguir de sus aseguradores el reembolso de sus gastos médicos.

Desde 1968 los trabajadores asalariados pueden ocupar un empleo en cualquier país miembro, siempre con todos los beneficios de la seguridad social y las demás ventajas sociales y derechos sindicales. Varios millones de europeos



viven hoy en un país distinto del suyo y un sistema comunitario de coordinación favorece el intercambio de ofertas y solicitudes de empleo. El migrante comunitario no puede percibir un salario inferior al de los autóctonos, ni ser despedidos antes que ellos a causa de su nacionalidad.

Para ayudar a los ciudadanos a comprenderse mejor y reducir ciertos obstáculos a su libre circulación, la Comunidad ha adoptado en el ámbito docente, diferentes medidas relativas a la enseñanza de idiomas, información sobre las realidades europeas, movilidad de estudiantes y docentes, y desarrollo de la cooperación entre los sistemas docentes nacionales.

La CEE contaba en 1986 con 6 millones de trabajadores migrantes, que con sus familias sumaban 12 millones. Después del vasto movimiento general en torno a los países de origen que se produjo a mediados de los años 70, el número de trabajadores migrantes en la década del 80 se hizo bastante estable, lo cual se debió no sólo a los efectos directos de la crisis, sino también en buena medida, a que las fronteras exteriores de los países miembros prácticamente se cerraron a nuevas entradas.

En general, la fuerza de trabajo exterior ocupa en las Comunidades empleos poco calificados que suelen rechazar los nacionales, lo cual explica porqué siguió recurriéndose a esa mano de obra a pesar de la crisis económica que se inició en 1973. Las tres cuartas partes de los trabajadores migrantes no comunitarios son peones, y sólo el 20% de ellos ha podido acceder a puestos a nivel de encargados o de obreros calificados.

La situación jurídica de los trabajadores migrantes varía mucho según sean originarios o no de un país de la Comunidad. Los comunitarios disfrutaban prácticamente de

todos los derechos concedidos a los nacionales, en cambio, la condición de originarios de terceros países, depende de la concreta legislación nacional del país receptor y de los acuerdos que hayan podido firmarse con el país de origen. Procedentes a menudo de países en vías de desarrollo, estos trabajadores se enfrentan frecuentemente con graves problemas culturales y con reacciones de rechazo por parte de las poblaciones locales.

Mientras que los trabajadores de terceros países han de disponer de un permiso de trabajo, cuya obtención se subordina a la presentación de un contrato de trabajo, los trabajadores de los países miembros pueden ejercer libremente actividades asalariadas en cualquier parte de la Comunidad, salvo excepciones transitorias de España y Portugal.

Desde 1968 se eliminó toda forma de discriminación basada en la nacionalidad, tanto en lo referente al empleo como a la remuneración y a las condiciones laborales. Los migrantes comunitarios no tienen necesidad de ningún permiso de trabajo y su carnet de residencia, de cinco años como mínimo, es automáticamente renovable. Sin embargo, caben dos limitaciones: el derecho a la libre circulación es posible rechazarlo por razones de orden público, de seguridad o de salud, y los empleos en la Administración Pública pueden reservarse todavía a los nacionales.

En materia de información, la Comisión favorece la colaboración entre los servicios de empleo nacionales y organiza intercambios de funcionarios de los países miembros.

Para las pensiones está garantizada la acumulación de períodos en distintos países de la Comunidad.

En cuanto a la familia del trabajador migrante, en caso de enfermedad, disfruta de la protección social del país de residencia, tanto si este último es el país receptor como si es el país de origen del trabajador migrante.

En la vivienda, la igualdad de trato garantizada en principio a los trabajadores comunitarios, encuentra numerosos obstáculos por ser insuficiente el número de viviendas de alquiler moderado, de manera tal que los trabajadores migrantes, cualquiera sea su origen, no obtienen viviendas sociales sino con un muy considerable retraso en relación a la población local, concentrándose así en barrios superpoblados e insalubres.

En cuanto a los derechos sindicales, desde 1975 los migrantes comunitarios disfrutaban de plena igualdad de trato en materia de afiliación y de ejercicio de los derechos sindicales. En lo concerniente a los derechos políticos, con la salvedad de quienes trabajan en Irlanda, así como irlandeses y ciudadanos de la Commonwealth que trabajan en el Reino Unido, los migrantes comunitarios no tienen derechos políticos en el país receptor.

Por otra parte, desde 1968 un reglamento europeo garantiza el derecho de los migrantes comunitarios a recibir educación y formación profesional en igualdad de condiciones que los nacionales.

Subsisten los problemas de los trabajadores de los terceros países, con un abismo adicional entre teoría y práctica. La falta de formación profesional y lingüística sigue constituyendo un serio obstáculo que les impide obtener empleos convenientes o ser promovidos, y en su gran mayoría no adquieren ninguna formación profesional durante su estancia en el país receptor. Muchos de ellos se ven

afectados por el paro, sobre todo en las industrias y en las regiones en reconversión, y sus hijos han de hacer frente a problemas socio-psicológicos y a otras dificultades, tanto en la escuela como en su acceso al trabajo.

3) Política social

El desarrollo económico de los años cincuenta y sesenta permitió que la Europa comunitaria realizara importantes progresos sociales, pero la evolución desfavorable de la economía mundial a partir de las crisis petroleras de los años setenta, creó un clima de pesimismo que convergió con una cuádruple necesidad: mejorar la competitividad, transformar la CEE en un auténtico mercado sin fronteras, difundir las nuevas tecnologías y dominar todas esas mutaciones a efectos de empleo.

De esa manera, se planteó en definitiva la necesidad de una política social más dinámica, basada en el diálogo social y en la búsqueda del consenso.

POLITICA AGRICOLA COMUN

1) Introducción

En el momento de negociarse el Tratado de Roma, los productos industriales en los países de la CEE no contaban con otra protección que la derivada de los derechos aduaneros y los contingentes, en tanto que para los productos agrícolas, además de los derechos aduaneros y los contingentes, existían otras muchas restricciones y fundamentalmente el comercio de Estado, los calendarios fronterizos y el sistema de precios mínimos.

Para evitarse complicaciones, los Seis podrían haber excluido del Mercado Común los productos agrícolas, pero no ocurrió tal cosa por dos razones básicas.

La primera, el enorme interés que desde el principio mostraron ciertos Estados con agricultura exportadora (los Países Bajos, Francia e Italia), para obtener unas bases comunitarias que permitiesen la ampliación del mercado para los productos exportables por sus agricultores.

En segundo término, la necesidad de superar la enorme contradicción que de hecho habrían representado unas industrias liberadas y sometidas a la competencia intracomunitaria, junto a unas agriculturas estrictamente nacionales con amplias diferencias de precios entre sí, y por ello, con influencias muy distintas en los salarios reales de los obreros industriales.

Los "fines" establecidos en el Tratado de Roma fueron claramente enunciados: acrecentar la productividad, hacer posible un nivel de vida equitativo para la población rural, estabilizar los mercados, garantizar aprovisionamientos y asegurar precios razonables para los consumidores.

El cumplimiento de tales objetivos constituyó la razón de ser de la política agrícola común, cuyas "bases" pueden sintetizarse del modo siguiente:

- Durante el período transitorio, se admitió el uso de ciertas formas de proteccionismo, especialmente del sistema de precios mínimos que se reguló expresamente en el Tratado.

- El desarrollo de los intercambios de productos en el interior de la Comunidad quedó asegurado teóricamente durante el período transitorio (y hasta que no se

estableciesen reglas comunes, coordinación obligatoria de las organizaciones nacionales o una organización europea) merced al sistema de contratos a largo plazo de compra-venta entre países miembros.

- Las reglas de competencia no se aplicaron al sector de la agricultura más que en la medida que expresamente determinó el Consejo de Ministros.

- Se previó el gradual establecimiento de una organización común de los mercados agrícolas, mediante reglas de competencia comunes, coordinación de las diversas organizaciones de mercado o establecimiento de organizaciones europeas de mercado.

El "procedimiento" para desarrollar la política común quedó meticulosamente fijado en el Tratado de Roma y conforme a él se convocó y celebró la Conferencia de Stressa.

Los representantes de los Estados Miembros de la Comunidad se reunieron en Stressa en Julio de 1958, para iniciar los trabajos encaminados a desarrollar las bases de la política agrícola común. A partir de los resultados de esta conferencia, la Comisión de la Comunidad preparó el borrador de las propuestas que el mismo Tratado de Roma le obligaba a presentar dentro del año 1959.

Tras el doble informe del Comité Económico y Social por un lado, y de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Parlamentaria por el otro, el 11 de Diciembre, la Comisión presentó una primera elaboración de su trabajo al Consejo. El 30 de Junio de 1960, la Comisión entregó su informe definitivo que pasó a la historia con el nombre de "Plan Mansholt", por el nombre del ex Ministro holandés y

vicepresidente de la Comisión que actuó como presidente del grupo que preparó las propuestas.

El Plan Mansholt estaba dividido en tres partes: la primera parte describía la situación agrícola y política de los Estados Miembros, la segunda parte se ocupaba de los principios fundamentales de la política agrícola común y la tercera parte contenía las propuestas concretas de reglamentación.

En su conjunto, en el momento de presentarse el Plan Mansholt, la agricultura de los Seis cubría el 87,0% del total de necesidades agrícolas de la Comunidad, en el sector de los cereales el abastecimiento propio satisfacía el 91,0% del consumo, y en carne de cerdo, mantequilla, hortalizas y azúcar, la producción superaba al consumo.

Este elevado grado de autosuficiencia y la disponibilidad de excedentes, se conseguía merced a una fuerte protección practicada por medio de métodos muy diversos de sostenimiento de las rentas agrarias, desde las intervenciones directas en el mercado interior (garantías de precios al productor, etc.) hasta las protecciones aplicadas en frontera (contingentes, precios mínimos, calendarios, etc.).

Los principios de la política agrícola común contenidos en el Plan Mansholt no variaban fundamentalmente de los enunciados en el Tratado de Roma y de los resultantes de la Conferencia de Stressa. En este aspecto, sólo hay que destacar la aspiración expresada en el Plan de que en la política agrícola común habrían de fundirse, en un sistema equilibrado, lo mejor de cada una de las políticas nacionales previas, a fin de dar solución a los distintos problemas en el marco de las nuevas posibilidades ofrecidas por la creación del mercado común agrícola.

En su tercera parte, el Plan Mansholt preveía la publicación de una serie de reglamentos comunitarios para ordenar el mercado de una serie de productos (cereales; azúcar, carne de vaca, carne de cerdo, huevos, aves, leche y sus derivados, hortalizas y legumbres, y vino). Para todos estos productos se formulaban propuestas muy concretas, y para el arroz y las grasas vegetales se anunciaba su inmediata elaboración.

2) Elaboración de la política agrícola común

Tal como se ha citado, el Consejo de Ministros de la CEE recibió el Plan Mansholt en Junio de 1960 y el 14 de Enero de 1962 aprobó las siguientes disposiciones comunitarias para la agricultura: decisión sobre reglas de competencia, reglamento financiero, decisión sobre precios mínimos, reglamentos de cereales, carne de cerdo, huevos, aves, frutas y hortalizas, y vinos, y decisión acerca de los transformados de ciertos productos agrícolas.

La puesta en vigor de las decisiones y reglamentos antes citados habría de ir seguida de la efectiva consolidación de la política agrícola común, merced a la adopción de una segunda serie de acuerdos sobre otros sectores básicos de la economía agrícola de la Comunidad.

Sin embargo, la ruptura de las negociaciones CEE-Reino Unido creó un evidente malestar dentro de la Comunidad, una de cuyas consecuencias fue un importante retraso en la adopción de nuevos acuerdos en el campo de la política agrícola común. De esta forma, los reglamentos sobre arroz, carne vacuna y productos lácteos, fueron aprobados en Febrero de 1964, después de superada la crisis CEE-Reino Unido.

A finales de 1964, habían quedado sólidamente reglamentadas y en pleno funcionamiento organizaciones de mercados con una "cobertura" del 85,0% de la producción agrícola de la CEE y del 37,0% de sus importaciones. El acuerdo obtenido el 15 de Diciembre de 1964 sobre precios comunes para los cereales, marcó la definitiva consolidación de la política agrícola común.

Con el paso de la segunda a la tercera fase del período transitorio de formación de la CEE, la instrumentación de la política agrícola común se aceleró, al sustituirse los "reglamentos transitorios", en los que se regulaba sobre todo el proceso de liberación intracomunitaria, por los "reglamentos definitivos", que significaban la apertura de la fase de mercado único con un mismo sistema de protección frente al exterior.

Con ese conjunto de reglamentos, se configuró la política agrícola del Mercado Común, con objetivos muy claros de autoabastecimiento para la mayoría de los productos de la zona templada, política que en gran medida se derivó de la fuerte presión de Francia y que fue duramente criticada en el exterior de la CEE.

3) Regulación agrícola

La defensa comunitaria frente al exterior se practica a través de una serie de mecanismos concretos.

El punto de partida es el "precio indicativo" que funciona como "precio guía", marcando la tendencia del mercado. Del precio indicativo, con una reducción que varía según los casos, se derivan los "precios umbral", que fijan el nivel a que deben situarse los precios de los productos importados para poder entrar en la CEE. La diferencia entre el precio umbral y el precio indicativo corresponde a los

gastos de transporte desde el punto de entrada en la CEE hasta la zona más deficitaria, en base a la cual se fija el precio indicativo.

La diferencia entre el precio indicativo y el precio umbral se nivela con los "prélèvements", que son "exacciones variables", en puerto o en frontera de entrada, para los productos procedentes de terceros países. En definitiva, la barrera de los prélèvements mantiene aislados los precios comunitarios de las fluctuaciones del mercado mundial. Son los prélèvements los que fluctúan, por diferencia entre los precios umbral, que se mantienen fijos a lo largo de toda la campaña, y los precios mundiales.

En la generalidad de los productos (cereales, carnes, excepto de bovino, huevos, lácteos, arroz y azúcar) el prélèvement sustituye a cualquier otra forma de protección en puerto o frontera. Sin embargo, en algunos casos, la TEC se mantiene como medio de protección frente a la competencia exterior (productos hortofrutícolas, vitivinícolas, tabaco, grasas) pero siempre con el apoyo de mecanismos adicionales.

Las sumas percibidas por los prélèvements se ingresan en el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícolas (FEOGA) y los recursos así obtenidos, más los resultantes de la TEC y más una participación sobre la base del impuesto sobre el valor agregado (IVA), permiten financiar la actividad del FEOGA en materias tales como el sostenimiento de los precios comunitarios en el interior, y las exportaciones de la Comunidad al resto del mundo, que se benefician de subvenciones (restituciones) que equivalen a la diferencia entre el precio comunitario y el precio del mercado mundial.

Tal como hoy funciona, la organización del mercado agrícola común se fundamenta en cuatro principios básicos: libre circulación interna, preferencia comunitaria, unidad de cuenta y montos compensatorios, y solidaridad financiera.

Libre circulación interna de los productos

La libre circulación interna de los productos implica el cumplimiento de tres requisitos: libertad de comercio, armonización de políticas y precios uniformes.

Los productos pueden circular en el interior de la Comunidad igual que lo hacen en cualquiera de los Estados Miembros, por la previa supresión de cualquier tipo de barreras: derechos aduaneros, restricciones cuantitativas, tasas y otras medidas de efecto equivalente. Dichas supresiones se han ido produciendo de forma escalonada, a medida que iba entrando en vigor el régimen de mercado único, subsistiendo como principal obstáculo los montos compensatorios.

La circulación interna no se consigue con la sola supresión de barreras arancelarias y no arancelarias y con la uniformidad de los precios. Ha de complementarse con reajustes en otras áreas del marco institucional, especialmente en el área fiscal (uniformidad impositiva) y en el área sanitaria (aplicación de un código común de medidas sanitarias y de reconocimiento), y tanto en el ámbito fiscal como en el sanitario queda aún bastante camino por recorrer.

Régimen interno de precios agrarios

Los precios en el mercado agrícola único pueden fluctuar libremente entre un mínimo o "suelo", que viene dado por los precios garantizados, y un máximo o "techo", que es el precio indicativo, a partir del cual se desencadena automáticamente la importación.

Administrativamente se fijan: el precio mínimo, que actúa de "precio suelo", precio de garantía o precio de intervención, para asegurar un nivel de retribución a los agricultores, y el precio máximo, que actúa de "precio techo", precio guía o precio indicativo, para que los consumidores no hayan de pagar más de ese nivel. Entre ambos límites, fijados oficialmente, el mercado se mueve en función de la oferta y la demanda, es decir, los precios oscilan entre el suelo y el techo al margen de lo que pueda suceder en el mercado mundial.

a) Precios-guía: Se fijan anualmente por el Consejo de Ministros y son precios al por mayor, no garantizados sino meramente indicativos. Marcan el nivel deseado para los precios de mercado a lo largo de la campaña, a fin de que sean suficientemente remuneradores para el agricultor, sin por ello lesionar los intereses del consumidor. Los precios-guía adoptan diversos nombres según los productos o grupos de productos.

- Precio Indicativo: Es el más significativo de todos los precio-guía por la importancia de los productos a que se refiere. Se fija para los cereales, arroz, azúcar, leche en polvo, mantequilla, aceite de oliva, colza y girasol. El punto geográfico de referencia para la fijación de los precios indicativos

es el de la zona más deficitaria para los cereales, la más excedentaria en el caso del azúcar, y el conjunto de la Comunidad para la leche, aceite de oliva y oleaginosas. De los precios indicativos derivan los precios de intervención.

- Precio de Orientación: Se fijan para la carne de vacuno y el vino. Las medidas de intervención se desencadenan cuando el precio de mercado desciende a un determinado nivel por debajo del precio de orientación.

En el caso del vacuno, el precio de orientación sirve de precio umbral a efectos de las importaciones, por lo tanto, si el precio internacional es inferior al precio de orientación, los productos foráneos son gravados con la TEC, y si no fuese suficiente con la TEC, se cubre la diferencia con un prélevement. En el caso del vino, del precio de orientación se deriva un precio de referencia que marca el nivel de entrada de las importaciones.

- Precio Objetivo: En el caso del tabaco en rama, el precio objetivo se fija para cada campaña a un nivel que se considera remunerador para los plantadores de tabaco. Los fabricantes, que adquieren la producción comunitaria a precio superior al del comercio internacional, perciben una prima por la diferencia.

- Precio Base: Es el nombre del precio-guía de la carne de porcino y de los productos del subsector hortofrutícola. El precio base se fija cada campaña para la carne de porcino y se calcula para las frutas y hortalizas. En el primer caso, a partir del precio esclusa, y en el segundo caso, como media aritmética

de las cotizaciones más bajas a que se hayan adquirido tales productos en los mercados comunitarios en las tres anteriores campañas.

b) Precios garantizados: Son establecidos a partir de los precios-guía por el Consejo de Ministros de las Comunidades, siendo a esos precios a los cuales los organismos de compra (generalmente organizaciones estatales o interprofesionales con apoyo estatal) tienen la obligación de adquirir la producción que les sea ofrecida por los productores. Los precios garantizados adoptan nombres diversos.

- Precio de intervención: Es el más representativo de todos los precios garantizados. Deriva del precio indicativo y, por lo tanto, es de aplicación a los cereales, azúcar, leche en polvo, mantequilla, aceite de oliva, colza y girasol. Para algunos productos se fijan también precios de intervención derivados, que registran las diferencias regionales en función de los gastos de transporte. Los precios de intervención suelen ir acompañados de mejoras mensuales, con el objeto de fomentar el escalonamiento de las ventas a lo largo de la campaña.

- Precio de compra: Es el precio al cual los organismos de intervención adquieren animales vivos (vacunos) y carnes de vacuno y de cerdo, así como los excedentes de productos hortofrutícolas. El precio de compra lo fija el Consejo de Ministros y deriva de su respectivo precio base (carne de cerdo y frutas y hortalizas) y del precio de orientación (animales vivos y carne de vacuno).

- Precio Mínimo: Funciona para la remolacha azucarera y se fija tomando en consideración la zona

más excedentaria de la CEE. Este precio es el que prevalece a falta de contratos entre productores y fábricas. Las fábricas tienen asignados unos contingentes que reparten entre los agricultores de su entorno. En los contratos, aparte del cupo señalado y de las demás condiciones de compra, debe figurar el precio, que en ningún caso puede ser inferior al precio mínimo.

- Precio de compra y de retirada: El precio de retirada para los hortofrutícolas es el equivalente a un porcentaje de su precio base, entre el 40,0% y el 70,0%, según los casos. No es precio garantizado aunque tiene efectos análogos.

Cuando el precio de mercado cae por debajo del precio de retirada, las organizaciones de productores no venden los productos de sus asociados sino que los retiran para hacer posible que el mercado reaccione al alza. La mercancía retirada la subvenciona el FEOGA, reembolsando a las organizaciones con cantidades equivalentes al nivel del precio de retirada más un 5,0% del precio base.

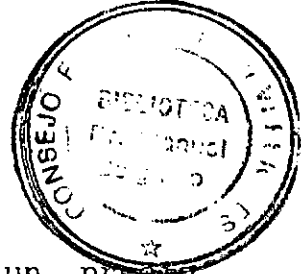
- Precio de desencadenamiento: Define el precio por debajo del cual no pueden caer los precios en el mercado del vino. Al no existir para este producto precio de compra garantizado, cuando los precios del mercado se sitúan durante dos semanas consecutivas por debajo del precio de desencadenamiento, se pone en marcha un mecanismo de reducción de la oferta a base de ayudas al almacenamiento privado, y si éstas fuesen insuficientes, se procede a la destilación de los caldos para obtención de alcohol, operación a la cual contribuye financieramente el FEOGA.

c) Precios de entrada: Son precios establecidos por el Consejo de Ministros de las Comunidades, en unos casos fijados y en otros calculados a partir de los precios-guía. Su objetivo fundamental consiste en que las importaciones accedan al interior del Mercado Común a un nivel que no cree competencia para la producción interna.

Por lo general, los precios de entrada se fijan muy próximos a los precios-guía, radicando la diferencia en los costos de transporte, de ahí que toda importación comunitaria de productos agrarios con precios garantizados se sitúe en el interior de la CEE como mínimo a un precio igual al precio-guía, pues los productos exportados a la Comunidad a precios inferiores a los precios de entrada, al acceder al Mercado Común se gravan, por lo general con un prélevement, con el cual se nivela el precio del producto foráneo al precio de entrada.

- Precio umbral: Es el más importante de todos los precios de entrada. El precio umbral se fija para todos los productos con precios indicativos y precios de intervención. Se puede definir como el precio más bajo al que una mercancía de un tercer país puede entrar en la Comunidad.

- Precio de esclusa: Es el precio de entrada de aquellos productos (carne de porcino, carne y huevos de ave) derivados de los animales en cuya alimentación entran los cereales. Los precios de esclusa, que suponen una gran complejidad técnica de cálculo, son el costo de producción teórico que tiene presente la eficiencia técnica de explotación y el aprovisionamiento de forrajes, en las mejores condiciones, de terceros países.



- Precio de referencia: Es también un precio calculado por la Comisión, en este caso para toda la campaña, y se aplica al vino y a los hortofrutícolas. En el caso del vino, el modo de estimación es por la media aritmética de los precios de producción de los Estados Miembros. En cuanto a las frutas y hortalizas, el procedimiento es similar, teniendo en cuenta que los precios de producción que entran en la base de cálculo son los correspondientes a los mercados más excedentarios de la Comunidad durante los tres años precedentes.

Preferencia comunitaria

La Comunidad sustituyó el antiguo sistema de protecciones aduaneras nacionales de sus Estados Miembros (barreras arancelarias y no arancelarias) por un régimen uniforme: el Arancel Aduanero Común (TEC), con derechos ad valorem que en el sector agrario resultan bastante proteccionistas, pero su aplicación en este sector constituye más bien la excepción que la regla.

El arma decisiva frente a la competencia exterior son los prélevements, que vienen a sustituir a los derechos ad valorem y a los contingentes por una "exacción variable" equivalente a la diferencia entre los precios de entrada (precio umbral) y los precios del mercado mundial (precios CIF o franco frontera).

Los prélevements y la TEC no son las únicas armas defensivas del Mercado Común Agrícola, ya que además están las cláusulas de salvaguardia y los derechos compensadores.

La cláusula de salvaguardia permite a la Comunidad suspender las importaciones, y tambien las exportaciones, si aprecia perturbaciones graves del mercado. Se prevé en la generalidad de los reglamentos, pero son de uso frecuente en los del vino, hortofrutícolas y carnes.

Por su parte, el derecho compensador es un gravámen que se aplica cuando sumando al precio franco frontera la incidencia de la TEC no se alcanza el precio de entrada, y precisamente la diferencia se cubre con un derecho compensador. Los derechos compensadores gravan los productos con precios de referencia: semillas de siembra, vino y hortofrutícolas.

Otra faceta de la preferencia comunitaria está del lado de las salidas de productos comunitarios y son las restituciones a la exportación. Su importancia ha ido creciendo en paralelo con los excedentes generados por la política agrícola común.

Las restituciones las otorga el FEOGA por un monto equivalente a la diferencia entre un monto, que resulta de adicionar al precio garantizado el costo de transporte al puerto de embarque, y el precio internacional, que marquen las cotizaciones en el momento de exportar. Así, en principio, la restitución es la inversa de los prélevements, pero mientras éstos son prácticamente automáticos, las restituciones no, ya que tanto en su cuantía como en las condiciones específicas de su concepción, responden a las directrices de política comercial que en cada caso concreto decide la Comunidad.

La preferencia comunitaria tambien viene marcada en una serie de acuerdos comerciales que pueden ser discriminatorios (no preferenciales) o especialmente favorables para un país concreto (preferenciales).

Con carácter multilateral, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), constituye desde 1964 el cuadro en el que se insertan las relaciones comerciales multilaterales de la CEE, siendo sus instrumentos más importantes, la cláusula de la nación más favorecida, la disminución de derechos de aduana y la eliminación de restricciones cuantitativas a través de negociaciones.

En el marco del GATT, la Comunidad tambien participa en otros acuerdos concretos, como es el referente al trigo (con precios pactados a nivel internacional), y asimismo suministra ayuda alimentaria mundial con destino a los países que atraviesan hambre y otras calamidades. Igualmente, en el seno del GATT, la Comunidad participa en los acuerdos sobre productos lácteos y sobre carne bovina.

Por otra parte, a través de convenios bilaterales, la Comunidad busca soluciones específicas para el comercio de productos concretos. Este es el caso de los acuerdos con países latinoamericanos para la carne bovina congelada destinada a la transformación industrial y el acuerdo con Suiza sobre el queso Emmenthal.

Finalmente, está la categoría de los llamados acuerdos autónomos, mediante los cuales la Comunidad exime a terceros países del cumplimiento de ciertas medidas de los reglamentos sectoriales de la política

agrícola común, siendo este el caso de la carne de cerdo, huevos y aves.

Cuando un tercer país se compromete a respetar el precio de exclusión, la Comunidad no fija el monto suplementario correspondiente. Otros casos son los del vino, con precios de referencia respetados, y el de los quesos, para los cuales la Comunidad adopta *prélevements* especiales respecto a terceros países que adquieren el compromiso de aceptar un determinado precio franco frontera.

Unidad de cuenta y montos compensatorios

La Unidad de Cuenta Agrícola (UCA) se creó en 1962 exclusivamente para los productos agrarios y sus transformados, pero no a los efectos de calcular los ingresos y gastos del FEOGA.

La UCA se definió, siguiendo las normas del FMI, por una paridad oro de 0,88867088 gramos, precisamente la misma del dólar de los Estados Unidos, y al estar directamente relacionadas con el oro y el dólar tanto la UCA como las restantes monedas nacionales, la traducción de los precios expresados en UCAs en cualquiera de las monedas nacionales resultó muy fácil hasta 1969, de manera tal que la política agrícola común fue desarrollándose sin grandes obstáculos.

Las cosas empezaron a cambiar con la depreciación del franco francés y la revaluación del marco alemán en 1969, eventos que marcaron el comienzo de grandes turbulencias financieras internacionales, y por otro lado la devaluación del dólar a fines de 1971.

Ante semejantes circunstancias, en primer lugar, de continuas devaluaciones y revaluaciones de monedas,

y en segundo lugar, de flotaciones generalizadas, hubieron de introducirse nuevos mecanismos en los intercambios de productos agrarios, a fin de mantener el principio de la libre circulación.

Primeramente, se recurrió al procedimiento conocido con el nombre de "tipos representativos", o paridad agrícola de cada moneda en términos de UCA. Esas paridades eran fijadas por el Consejo de Ministros de la CEE y se modificaban siempre que se hubieran producido variaciones en la cotización de cualquiera de las monedas.

El segundo mecanismo introducido fueron los "montos compensatorios monetarios" (MCM), que no se aplican entre los países del Benelux porque de hecho forman un área monetaria con tipos de cambios fijos y tampoco tienen virtualidad para los productos agrarios no regulados o para aquellos que sí estándolo no tienen previsto mecanismo de garantía permanente, siendo este el caso del importante subsector hortofrutícola.

En cuanto a terceros países, los prélèvements a las importaciones que impone la CEE y las restituciones que concede a las exportaciones, quedan al margen de las perturbaciones monetarias internas, sin embargo, para no perjudicar a ningún país miembro, el valor se afecta en ambos casos con un índice corrector.

Los MCM se utilizan en la Comunidad desde 1969, fecha en que la devaluación del franco francés alteró el esquema de funcionamiento normal de la política agrícola comunitaria, que había establecido el principio de uniformidad de los precios agrícolas. Es

decir, las instituciones o agencias interventoras de cada uno de los países comunitarios, encargadas de comprar o vender los productos agrícolas a precios de garantía, pagaban o cobraban todas lo mismo en sus monedas nacionales respectivas.

La Comunidad expresaba los precios agrícolas comunes en un denominador común, la UCA, que tenía un valor igual al dólar, y después cada país los transformaba en moneda nacional aplicando el tipo de cambio correspondiente.

Sin embargo, al devaluarse el franco francés, un dólar suponía más francos franceses y lo mismo sucedía con la UCA. De esta forma, un mismo precio expresado en UCAs suponía más francos franceses, y por ello mismo, la agencia de intervención francesa tendría que haber pagado a los agricultores un precio mayor por sus productos.

Lógicamente, por razones financieras y de inflación, las autoridades francesas y las comunitarias no estaban dispuestas a admitir que la devaluación del franco fuera a distorsionar todo el mercado agrícola. Por ello, se decidió aplazar la subida de algunos de los precios agrícolas franceses, permitiendo que el tipo de cambio al que se transformaba la UCA en francos franceses siguiera siendo el mismo que el de antes de la devaluación, y de esta forma, los precios en francos de tales productos no sufrieron alteración.

Se establecieron así dos tipos de cambio distintos: el "tipo de cambio central", que era el nuevo de ámbito general tras la devaluación y el "tipo de cambio verde", que era el anterior a la

devaluación, de aplicación sólo para aquellos productos agrícolas cuyos precios se pretendía mantener en el nivel anterior, resolviéndose de este modo el problema del aumento de precios excesivo en Francia.

Pero en las nuevas circunstancias, existía la posibilidad de comprar un producto de los mantenidos artificialmente bajos de precio en Francia, por la aplicación del tipo de cambio verde, y exportarlo a otro país comunitario, venderlo a su agencia de intervención cobrando en su moneda nacional y finalmente cambiar las divisas así obtenidas en francos franceses al tipo de cambio central, obteniendo por la operación un cierto beneficio. De la misma forma, las exportaciones comunitarias a Francia de esos productos se verían desfavorecidas al tener que competir con precios franceses inferiores.

En definitiva, el Monto Compensatorio Monetario, que originalmente fue una tasa a la exportación francesa, la necesaria para evitar la posibilidad de un beneficio especulativo, y una subvención a las exportaciones comunitarias a Francia, la necesaria para ponerlas en igualdad de condiciones con los productos franceses, se convirtió en un mecanismo permanente.

De acuerdo con este esquema, toda variación en el diferencial entre el tipo de cambio central y el tipo de cambio verde, supone la adopción de nuevos Montos Compensatorios Monetarios, para así aislar a los agricultores de las fluctuaciones monetarias. Sin su existencia, los precios agrícolas en cualquier país comunitario aumentarían si la moneda del país se devaluara o se depreciara, y disminuirían si la moneda

se apreciara. De esta forma, los movimientos en la cotización de las monedas no se reflejan en los precios agrícolas, a no ser que los Gobiernos de los respectivos países así lo deseen y "devalúen" o "revalúen" el tipo de cambio verde.

Los MCM han sido duramente criticados, por cuanto que, al romper de hecho la uniformidad de los precios agrícolas en la CEE y al permitir a los Gobiernos nacionales variar unilateralmente sus precios agrícolas, introducen distorsiones en la asignación de recursos que se traducen, por ejemplo, en la acumulación de productos agrícolas de difícil colocación fuera de la Comunidad.

Asimismo, es necesario precisar, que desde la inauguración del Sistema Monetario Europeo el 13 de Marzo de 1979, los precios agrícolas comunitarios se fijan en ECUs.

Los montos compensatorios, que tienen por objeto permitir la libre circulación y que fueron concebidos en su origen como un correctivo provisional destinado a salvaguardar la unidad del mercado, se han transformado en verdaderas subvenciones e imposiciones, contrarias al principio del Mercado Común, ya que en definitiva reintroducen niveles de precios agrícolas diferentes en el interior de la Comunidad.

4) Efectos de la política agrícola común

Impulsada por el sistema de precios comunitarios, la agricultura europea progresó desde 1962 a tasas superiores a la general de la industria, a un ritmo que como promedio representó el 7,0% anual acumulativo entre 1961 y 1970.

Consecuencia de ello fue la aparición de los excedentes, así como el fuerte aumento de los gastos del FEOGA. Mientras en 1960 las ayudas nacionales a la agricultura por parte de los Estados Miembros, cuando todavía no se había montado el sistema comunitario, representaban el equivalente a unos 2.100 millones de dólares, en 1970 las ayudas comunitarias se acercaban a los 4.000 millones de dólares, y con los vestigios de las ayudas nacionales que todavía quedaban, el total se situó en los 4.500 millones de dólares.

Ante ese cúmulo de circunstancias, surge en 1968 el segundo Plan Mansholt, que formuló seis proposiciones reformadoras. En este plan lo primero que se trataba era de modernizar las explotaciones y de ampliar su dimensión para conseguir economías de escala. En segundo término, se propusieron mecanismos conducentes a acelerar la retirada de los agricultores más viejos, para así rejuvenecer la empresa agraria y hacerla más dinámica.

En tercer lugar se esbozaban las posibles mejoras en la formación profesional de los agricultores. El cuarto conjunto de medidas previstas eran los estímulos para la reducción de la superficie agrícola útil, con el fin de ir eliminando el problema de los excedentes.

Como puntos quinto y sexto del programa figuraban, para atacar el problema de excedentes de la Comunidad, una reducción drástica del censo ganadero, sobre todo el de aptitud láctea, así como el fomento de la agricultura de grupo.

5) Acciones del FEOGA-Sección Orientación

Desde que entró en vigor el régimen definitivo de financiación comunitaria, fueron poniéndose en marcha una

serie de acciones del FEOGA-Sección Orientación. Las tres acciones más relevantes son: la modernización de las explotaciones, el fomento para el cese en la actividad y la formación profesional. Estas directivas recogieron en parte el 17 de Abril de 1972 los planteamientos generales hechos por Mansholt en 1968.

La modernización de las explotaciones agrarias se dirige especialmente hacia aquellas explotaciones cuya renta de trabajo es inferior a la media regional. Las ayudas son de dos tipos: financieras y reales. Entre las primeras se incluyen las garantías estatales de los préstamos y la bonificación de los tipos de interés. Entre las segundas se encuentra la preferencia en la adjudicación de tierras de los agricultores que cesan en su actividad.

El fomento en el cese de la actividad agraria y la afectación de las superficies liberadas a los programas de mejoras de estructuras, tiene como propósito favorecer el cese en la actividad agrícola de los agricultores cuyas explotaciones no se consideran económicamente viables. Las tierras así liberadas pueden pasar a formar parte de explotaciones a modernizar, o bien destinarse a usos forestales.

A los agricultores cuyas explotaciones no sean rentables se les ofrece dos alternativas: modernizarlas o cesar en la actividad. En este segundo caso, los agricultores, según su edad, pueden acceder directamente a la jubilación o integrarse en otra profesión, y por la cesión de sus tierras perciben una indemnización proporcional a la superficie liberada.

La tercera directiva, referente a la información socioeconómica y formación profesional de los agricultores, tiene como finalidad complementar las dos anteriormente

analizadas, con una triple vertiente: información socioeconómica a los agricultores y a los asalariados agrícolas, formación profesional de los mismos y reconversión hacia otras actividades de las personas que deseen abandonar la agricultura.

Difícilmente cabe una modernización agraria si las personas que permanecen en esta actividad no adquieren formación suficiente, tanto en el aspecto técnico, para asimilar las innovaciones que a diario se introducen, como en el aspecto económico, para trabajar con criterios de rentabilidad. Otro tanto puede decirse de aquellas personas que abandonan la actividad agraria antes de su jubilación, ya que su readaptación exige un periodo de aprendizaje que les permita insertarse con éxito en sus nuevas ocupaciones.

En lo que respecta a la información socioeconómica, los Estados Miembros crearon y potenciaron servicios de información públicos y privados para proporcionar al agricultor la información necesaria para sus actividades. Igualmente, desarrollaron centros especializados donde los agricultores mayores de dieciocho años puedan seguir cursos complementarios de carácter general, técnicos y económicos.

6) Objetivos de la Política Agrícola Común

En cuanto a la población ocupada en el sector (agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura) en todos los países miembros venía reduciéndose de forma importante desde los años cincuenta. La integración, dada la favorable coyuntura económica con que se inició a partir de los años sesenta, aceleró ese proceso.

El segundo de los objetivos enunciados por el Tratado de Roma -asegurar un nivel de vida justo para la población agraria a través de la elevación de los precios y rentas-

fue formulado de forma muy genérica, pero después se especificó de forma muy concreta en los siguientes términos: la renta que perciben los agricultores habrá de ser comparable a los salarios brutos medios que perciban los trabajadores no agrícolas de su región y esa renta habrá de provenir sobre todo de los precios remuneradores para el productor. En este sentido, hubo mejoras absolutas, pero en términos relativos, la Política Agrícola Común, operando fundamentalmente a través de los precios, no fue suficiente para acortar distancias.

A la Política Agrícola Común se le asignó en el Tratado de Roma otra importante función: estabilizar los mercados, lo cual en principio debía haberse logrado por el propio mecanismo de fijación de precios. En este caso, no fue tan desproporcionada la apreciación de Zeller, al escribir que "los mecanismos de estabilización de los mercados han sido desviados y desnaturalizados. Se han convertido en instrumentos de garantía de precios, destruyendo así la noción misma de mercado".

Uno de los argumentos de más peso entre los esgrimidos para justificar el proteccionismo agrario, fue el de asegurarse las fuentes de suministro y eliminar la dependencia exterior, que podría haber sido sumamente grave en caso de tensiones internacionales. Y, verdaderamente, este objetivo sí que se cumplió con el sistema de precios garantizados.

Otro dato de interés es que la elevada tasa de productividad agraria y el alto nivel de protección del sector, permiten que el balance alimentario de la CEE haya podido llegar al de autoabastecimiento humano, no sucediendo lo mismo en el caso del consumo animal, en el que la CEE es todavía deficitaria, principalmente en maíz.

Por lo demás, son muchos los productos de primera necesidad en que se rebasa la cota del 100% de autoabastecimiento, surgiendo entonces el espinoso problema de los excedentes agrarios, con dificultades de colocación en el mercado interno y externo.

El paso de la Comunidad de Seis a Nueve, primero, y de Nueve a Diez, después, incorporó un país, el Reino Unido, ampliamente deficitario en la casi totalidad de los subsectores, excepto en el lácteo, y a una Grecia deficitaria en todo menos en hortofrutícolas y vino. Desde 1986, con la incorporación de España y Portugal, los excedentes irían en aumento, a no ser por los efectivos controles que tienen como finalidad ir cambiando la previa situación excedentaria.

A fines de 1980, la Comisión de las Comunidades Europeas hizo público un extenso memorándum con sus reflexiones sobre los resultados de la Política Agrícola Común:

- En los veinte últimos años la producción agrícola creció a un ritmo anual acumulativo del 2,5%, lo que significa un incremento total de la producción del 63,8%, representando esa espectacular expansión una contribución considerable a la modernización de la agricultura.

- Entre 1958 y 1979, la modernización agrícola permitió liberar más de 10 millones de personas, que pasaron de la población activa rural a la industria y a los servicios.

- En 1980, el empleo directo en la agricultura era de 8 millones de personas, y si a esa cifra se añaden los empleos de los insumos agrarios (fertilizantes, maquinaria agrícola, etc.) y de los outputs también agrarios

(transformación de productos agrícolas en alimentos y manufacturas), era evidente que la agricultura y la agroindustria constituían una de las primeras ramas de la actividad económica comunitaria.

- Desde 1958, la renta real de los agricultores creció a una media anual acumulada del 2,8%, lo que representó un ritmo de expansión similar al de los demás sectores en el período 1968-1976, con un incremento total del 74,0%, un crecimiento verdaderamente impresionante que se tradujo en un mayor bienestar en las zonas rurales.

Pero al tiempo que las Comunidades destacaban los logros obtenidos por la Política Agrícola Común, no ocultaron por ello las dificultades existentes, en cuanto a excedentes de productos lácteos, vino, cereales, etc.

La conclusión lógica a la que llegó la Comisión, fue la necesidad de una regulación física y económica del sistema productivo, para impedir que los precios de garantía conduzcan a cifras ilimitadas en cuanto al sostenimiento y a las primas a la exportación.

La Comunidad también advirtió la circunstancia de que la homogeneidad absoluta en los apoyos comunitarios introduce un trato inequitativo, en función de la muy diversa situación de renta y condiciones de vida en que se encuentran los agricultores según las regiones, tamaño de las explotaciones, etc.

Por otra parte, la Comunidad reconoció que sus precios son muy superiores a los niveles medios de los precios mundiales, si bien con excepciones considerables como el de los productos lácteos, más altos en los Estados Unidos y en el Japón.

Por último, la Comisión hizo la autocrítica de lo que la Política Agrícola Común representa en términos de dificultades presupuestarias para los Estados Miembros, si bien puso de relieve que los gastos netos del FEOGA no representaron en 1979 más que el 0,47% del producto bruto interno global de las Comunidades, y que no significó sino el 2,8% del total de los gastos en alimentación de las familias de toda la Comunidad.

La Comisión destacó igualmente que en una época de gran depresión como la que se inició en 1973, la Política Agrícola Común supuso el mantenimiento de una población activa de 8 millones de agricultores y obreros agrícolas con un costo no superior a los 6.000 millones de Unidades de Cuenta, en tanto que la financiación del seguro de paro en los países comunitarios para una población desempleada de 7 millones de personas, representó en el mismo año 1979 una cantidad superior a los 30.000 millones de Unidades de Cuenta.

En el capítulo de las soluciones a los problemas apreciados en las dos primeras décadas de la Política Agrícola Común, la Comisión estableció un esquema inicial que se puede resumir como sigue:

- Mantener el acervo comunitario en sus aspectos positivos, de forma especial en lo concerniente a la seguridad de los suministros, precios estables, retribución razonable de los agricultores, libertad de los intercambios, progreso de la agricultura y contribución del sector al comercio exterior.

- Poner en marcha mecanismos que permitan dominar las consecuencias presupuestarias de los excedentes de producción, haciendo posible de esta forma una mejor utilización de los recursos comunitarios.

- Asegurar una mejor distribución regional de las ventajas resultantes de la Política Agrícola Común para los explotadores agrícolas.

- Organizar la financiación de la Política Agrícola Común sobre bases sanas, que en el futuro no sean objeto de discrepancias entre los Estados Miembros.

- Reformar las organizaciones de mercado, introduciendo el nuevo principio fundamental de la corresponsabilidad o participación de los productores.

- Reorientar profundamente la política de estructuras en línea.

- Impulsar la silvicultura, con el objeto de conseguir un uso más racional del suelo y un mejor abastecimiento interior de madera, para la industria y especialmente para las fábricas de pasta y papel.

- Considerar a la agricultura como fuente energética de importancia, a través de la producción de biomasa con fines energéticos.

En Julio de 1985, la Comisión hizo público su Libro Verde, con el título "Perspectivas de la Política Agrícola Común", planteando claramente las líneas de una política tendiente a frenar el crecimiento de los precios y de las producciones agrícolas.

POLITICA PESQUERA COMUN

A partir de 1976 fue cuando la política pesquera adquirió verdadera entidad propia, ya que el 19 de Enero de ese año se regularon la política de mercado y la política de estructuras.

1) Política de mercado

Su título primero se refiere a las normas de comercialización desde la primera venta al por mayor. Estas normas comunitarias se aplican a once especies: bacalao fresco, pescadilla negra, bacalao del Norte, platija, rascazo, caballa, arenque, sardinas, anchoas, merluza y camarón. Suponen, aproximadamente, el 60,0% de las capturas de la CEE y el 80,0% de las importaciones de terceros países.

Las normas se refieren al frescor, tamaño y etiquetado de los productos. En lo relativo al primer punto, se tiene en cuenta el aspecto, estado y color del producto, y en base a ello se fijan tres categorías: "extra", "A" y "B". El tamaño se define en función del peso o del número de peces por kilogramo y en el etiquetado se distingue la producción comunitaria de las importaciones.

Las organizaciones de productores tienden a asegurar el ejercicio racional de la pesca y la mejora de las condiciones de comercialización. A través de ellas se fijan los planes de pesca, para adaptar la producción al consumo, e intervienen igualmente en la normalización de las capturas, comercialización de la producción y regularización de los precios. Las organizaciones de productores permiten el acceso a ciertas ventajas, como ser la prioridad en las facilidades para la inversión, el apoyo al funcionamiento durante los tres años siguientes a la fecha de su constitución y las ayudas de intervención.

Como en el caso de otras organizaciones comunes de mercado, para la pesca existen diversos tipos de precios. El precio de orientación tiende a asegurar la estabilidad de los mercados, impidiendo la creación de excedentes merced al mantenimiento de ingresos estables para el



productor y con el respeto al interés de los consumidores. Los precios de orientación son fijados por el Consejo de Ministros conforme a los precios medios de las tres últimas campañas, haciendo referencia básicamente a productos frescos o refrigerados aunque también a algunos productos congelados.

El precio de retirada es fijado por la Comisión a un nivel del 60,0%-90,0% del precio de orientación y constituye la compensación financiera que el FEOGA garantiza a las organizaciones de productores. El valor de la compensación financiera se calcula aplicando a las cantidades retiradas un precio igual al 60,0% del precio de orientación cuando el precio de retirada es superior al 65,0% del precio de orientación, o un precio igual al 55,0% del precio de orientación cuando el precio de retirada no supera el 65,0% del precio de orientación.

Para algunos productos congelados, existe la posibilidad de una compensación financiera a las organizaciones de productores destinada al almacenaje, cuando se dan perturbaciones en el mercado que pudieran ocasionar caídas sustanciales de los precios. Para que entre en funcionamiento el sistema, los precios de mercado han de caer por debajo del 85,0% del precio de orientación respectivo, y el pescado congelado a almacenar ha de haber sido elaborado a bordo, a fin de evitar el deterioro de la calidad. Estas ayudas exigen el previo contrato entre la organización de productores respectiva y el Estado Miembro.

En lo concerniente a la importación, no existen restricciones cuantitativas y además, para facilitar el aprovisionamiento y los intereses del consumidor en lo relativo a especies deficitarias en la Comunidad, se prevé la suspensión de derechos para determinadas épocas del año.

Igualmente se prevé la suspensión o rebaja de derechos arancelarios en el caso de importaciones procedentes de algunos terceros países (Marruecos, Túnez, Turquía).

La Comisión calcula diariamente el precio de entrada de las importaciones de productos de la pesca en base a los datos facilitados por los países miembros y, paralelamente, se fija un precio de referencia como nivel mínimo al que se considera deben poder entrar las importaciones al área comunitaria. Entonces, si el precio de entrada queda por debajo del precio de referencia, las importaciones se recargan con una tasa compensatoria equivalente a la diferencia.

En cuanto a las exportaciones, y a efectos de posibilitar la competitividad exterior de los productos de la pesca de origen comunitario, existe la posibilidad de restituciones cuando los precios comunitarios resultan superiores a los precios del mercado internacional. Las restituciones se fijan para un período de tres meses, debiendo ser iguales en toda la Comunidad, si bien pueden variar en función del destino de las exportaciones.

2) Política estructural

Tiene como objetivo facilitar un desarrollo racional de la capacidad de producción en función de la conservación y renovación de los recursos pesqueros, lo que supone un proceso de modernización de la flota que, a su vez, comporta su reorientación o reducción. El instrumento para la realización de la política estructural lo constituye el FEOGA-Sección Orientación.

Política estructural en el sector bajura

La bajura da empleo directo al 80,0% del total de los pescadores comunitarios, equivalentes a unas

150.000 personas, con una alta concentración en Italia, Francia y España.

El importe de la ayuda comunitaria no puede, en principio, sobrepasar el 25,0% del importe global. Por su parte, el Estado Miembro interesado debe hacer un aporte equivalente al del FEOGA, que no debe ser inferior al 25,0% del proyecto, y la participación del beneficiario ha de ascender como mínimo al 25,0%.

En el caso de determinadas regiones desfavorecidas, los anteriores porcentajes pueden experimentar variaciones. Concretamente, la participación comunitaria puede alcanzar el 50,0% para programas estructurales y en tales supuestos, la participación mínima del beneficiario puede descender del 25,0%.

El desarrollo de la capacidad productiva se consigue por compra, construcción o modernización de buques, con nuevas técnicas pesqueras o con el perfeccionamiento de la formación y capacitación técnica de los trabajadores del sector.

También puede pretenderse la reducción de la capacidad mediante la concesión de primas de inmovilización por un 8,0% anual del precio del buque, o con primas al desguace y para la reconversión a otro tipo de actividades o venta a terceros países.

Los pescadores afectados por programas de disminución de capacidad productiva, se benefician con un sistema de incitación a la jubilación anticipada para los mayores de 50 años, con subsidios comunitarios si no han alcanzado esa edad.

Política estructural en el sector de altura

Las medidas previstas para la pesca de altura tienden a adaptar los niveles de capturas a los recursos existentes. A tales efectos, la Comunidad se hace cargo del 50,0% del costo de los proyectos a desarrollar y un primer supuesto es el de los armadores que optan por dedicar su flota, o parte de ella, a la captura de especies subexplotadas, no explotadas o hacia nuevos caladeros.

También es posible la concesión de primas de inmovilización voluntaria a favor de los armadores que cesan temporalmente, ascendiendo la subvención al 8,0% del costo del buque por año de inmovilización. Esa prima se completa con una contribución de la Comunidad en las subvenciones estatales a los pescadores que queden en paro, pudiendo alcanzar la contribución comunitaria hasta el 50,0% de los gastos experimentados por la Administración Nacional.

Se prevé finalmente, la concesión de primas al cese definitivo en la actividad pesquera por venta del barco para su desguace a un tercer país, pudiendo ser con el propósito de reconversión de la empresa a otros objetivos, previéndose también determinadas compensaciones a favor de los trabajadores afectados.

Política estructural de transformación y comercialización de productos de la pesca

La aplicación de los programas de reestructuración comporta reducciones en las posibilidades productivas de la industria de transformación. Por ello, en 1977 se aprobó un Reglamento del Consejo sobre ayudas del FEOGA a la

financiación de determinados proyectos en el sector de transformación, referidos a la racionalización, construcción de depósitos para almacenaje, acondicionamiento, conservación y mejora de los circuitos de comercialización.

Ayuda para la vigilancia de la zona de 200 millas

La extensión por parte de la Comunidad de la zona de pesca a 200 millas supuso un incremento considerable de los gastos de control, por lo cual se previó la concesión de ayudas a los países miembros más afectados. Concretamente, una Resolución de 1976 señaló que cuando un Estado Miembro deba soportar costos de vigilancia desproporcionados en relación con los recursos que obtiene en su zona de pesca, se hará acreedor de la ayuda comunitaria.

Política de conservación de recursos

El proceso iniciado por los países en vías de desarrollo de declarar espacio reservado de pesca las 200 millas, para así conservar sus recursos, fue muy pronto imitado por determinados países industrializados con fuertes intereses en el sector pesquero.

Como consecuencia de la extensión practicada por numerosos terceros países, inevitablemente se produjo la retirada de flotas de esos caladeros, surgiendo así la amenaza de que pudieran acudir a faenar en el área de la Comunidad flotas tan importantes como las de la Unión Soviética o Japón. De acuerdo a ello, el Consejo de Ministros en su Resolución del 3 de Noviembre de 1976, decidió extender las aguas comunitarias a efectos de la pesca hasta 200 millas a partir del 1 de

Enero de 1977, refiriéndose la extensión sólo a las aguas del Atlántico y del Mar del Norte.

3) Conservación y gestión de recursos

La política de conservación de recursos tiene su manifestación esencial en la fijación anual del total de capturas por especies. La aplicación de esa política ha supuesto, dada la tendencia decreciente manifestada en los stocks ictiológicos en los últimos años, el establecimiento de un freno al esfuerzo pesquero y, en algún caso, la prohibición absoluta de la pesca de determinadas especies, tal como ha ocurrido con la pesca del arenque para fines industriales en el Mar del Norte.

La limitación de las capturas anuales obliga a la distribución de cuotas entre los países miembros, según las claves de reparto de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Norte (NEAFC) dado que las mismas toman en consideración diversos elementos importantes, como ser la actividad tradicional pesquera, una cierta preferencia por la pesca de bajura y las necesidades específicas.

Otros criterios tomados en consideración para la fijación de las cuotas son las capturas mínimas que podrán ser llevadas a cabo en las aguas comunitarias, el saldo neto de capturas en las relaciones con terceros países, las pérdidas sufridas por determinadas flotas de países miembros en aguas de terceros países, las ganancias igualmente potenciales producidas en aguas propias como consecuencia de la desaparición de flotas de terceros países, etc.

El sistema de control abarca aspectos como concesión de licencias, inspección a bordo, control de desembarco, limitaciones temporales, sectoriales o zonales, control de

las artes de pesca, de los tipos de barcos, etc. Sin embargo, aunque se prevé que un día el control tendrá carácter comunitario, aún se aplica para cada una de las Administraciones Nacionales, sin que las condiciones del mismo estén perfectamente armonizadas y reguladas. Ello ha originado numerosos juicios pesqueros entre los propios países comunitarios, que han llegado en ocasiones hasta el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades.

4) Relaciones con terceros países y con organizaciones internacionales

La política pesquera comunitaria obliga a la paralela reglamentación de las relaciones con el exterior. En este sentido, simultáneamente con el establecimiento de la zona comunitaria de las 200 millas, una decisión del Consejo del 3 de Noviembre de 1976 autorizó a la Comisión a negociar con terceros países acuerdos bilaterales. En la decisión del Consejo se fijaban tres categorías de negociación, en función de los intereses pesqueros mutuos:

- Países con interés para la Comunidad pero sin interés recíproco de ese país por las aguas comunitarias. En este caso, se trata de obtener las mejores condiciones para el acceso de los pesqueros comunitarios.

- Países con interés recíproco. En este caso funcionaría el principio de reciprocidad como criterio directriz de las negociaciones.

- Terceros países con intereses de pesca en las aguas comunitarias pero sin interés específico para los pescadores comunitarios. El objetivo final del acuerdo implicaría entonces la evacuación progresiva de tales pesqueros de las aguas comunitarias.

Las negociaciones comunitarias con terceros países se llevan a cabo para firmar un acuerdo-marco, sin contenido económico específico, pero que implica la aceptación por parte del tercer país de la política de pesca de la Comunidad.

5) Acuerdos del 30 de Setiembre de 1981

El 30 de Setiembre de 1981 la CEE dió un importante paso al lograrse un acuerdo sobre la regulación del mercado pesquero y la normalización de las relaciones con terceros países, como Canadá, Suecia y las Islas Feroe. En este sentido se dió "luz verde" definitiva a los acuerdos suscriptos (ya habían sido aprobados pero no puestos en práctica) que estaban pendientes de solución en torno al mercado interno de la Comunidad. El convenio con Canadá es especialmente importante para la República Federal de Alemania, cuyos pesqueros de arrastre de altura podrán faenar en aguas canadienses.

En cuanto a las medidas de regulación del mercado pesquero, los ministros de la Comunidad Económica Europea acordaron ampliar con carácter indefinido las medidas de conservación adoptadas con anterioridad. También se fijaron procedimientos para financiar la retirada del pescado cuando las capturas excedan a la demanda, y para la puesta en práctica de medidas en caso de importaciones de terceros países a precios inferiores al precio de referencia fijado por la CEE.

Por último, en Marzo de 1983 se llegó a una definición de la "Europa Azul", con la demarcación de todas las aguas comunitarias atlánticas, cuotas de capturas, reparto por países, áreas de reserva para pescadores de bajura, ayudas estructurales, etc.

INTEGRACION FINANCIERA

1) Libre circulación de capitales

El Tratado de Roma dispuso que la eliminación de las restricciones a los movimientos de capitales debería hacerse en la medida necesaria para el buen funcionamiento del Mercado Común. Con este precepto, se marcó el principio de aplicar la liberalización de los movimientos de capitales y de los controles de cambios, pero sólo en tanto fuera indispensable para no obstaculizar el ejercicio de las demás libertades del Tratado.

La libertad de circulación de capitales se reguló mediante dos Directivas: la primera del 11 de Mayo de 1960 y la segunda del 18 de Diciembre de 1962, que completó y modificó a la primera.

La sistemática seguida consistió en la clasificación de las operaciones en cuatro categorías. En la primera, se incluyeron las operaciones liberalizadas total y automáticamente, pero sometidas a un régimen de autorización individual, en la segunda, las operaciones liberalizadas totalmente mediante autorizaciones de carácter general, en la tercera, las operaciones liberalizadas en forma "revocable" y finalmente, en la cuarta, se incluyeron las operaciones que aún no habían sido objeto de medidas de liberalización.

Entre las Directivas posteriores hay que señalar como más importantes a las siguientes:

- La del 31 de Mayo de 1963, que obligó abolir las restricciones a los pagos correspondientes a las prestaciones de servicios internacionales en el interior de la Comunidad, cuando tales restricciones fueran el único obstáculo a las referidas prestaciones de servicios.

- La del 21 de Marzo de 1972, para la regulación de los flujos financieros con vista a la neutralización de sus efectos indeseables en la liquidez interna.

- La del 28 de Junio de 1973, sobre la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento de servicios bancarios y de otras entidades financieras.

En definitiva, conforme a las Directivas que se refieren al libre movimiento de capitales, los ítems aún no sometidos a la normativa comunitaria son los siguientes:

- Inversiones en bonos del Tesoro, incluyendo las inversiones en otros títulos normalmente negociados en el mercado monetario.

- Transferencias a cuentas corrientes y de depósitos y su liquidación.

- Concesión y reembolso de créditos, ligados a transacciones comerciales en las cuales no participe ningún residente, así como de créditos a corto plazo no ligados a transacciones comerciales.

- Caucciones, otras garantías y derechos de prenda ligados a créditos-préstamos de carácter personal.

2) Sociedad anónima europea y armonización contable

En Marzo de 1965 el Gobierno francés sugirió la creación de una sociedad comercial europea, con la presentación de una ley uniforme en los Parlamentos de los Estados Miembros. Para desarrollar la idea, el 22 de Abril de 1966 la Comisión de la CEE remitió al Consejo un memorándum en el que analizaba detalladamente las bases jurídicas sobre las que podría asentarse el Estatuto de la sociedad anónima europea. Pero ahí se paró el expediente.

A finales de 1966 se presentó un anteproyecto del profesor holandés Sanders, y en 1969 la Comisión hizo lo propio con su proyecto, para acto seguido consultar a los representantes sociales del Consejo Económico y Social sobre una eventual reglamentación de la representación laboral en la sociedad anónima europea. Pero el tema volvió a estancarse.

El Consejo de Ministros de la Comunidad el 9 de Junio de 1970, al discutir el Plan Werner, determinó que la adopción del Estatuto sobre la sociedad europea debería realizarse de inmediato, y para llevar a cabo este propósito, el 24 de Junio de 1970 la Comisión presentó al Consejo un proyecto más perfilado de sociedad anónima europea.

A pesar de tan buenos propósitos, desde Junio de 1970 el proyecto sigue sin que se haya adoptado una decisión final.

El relativo fracaso de establecer un marco común para una sociedad anónima europea, no ha impedido una cierta armonización del derecho societario tal como lo demuestran las ocho directivas que hasta ahora se han referido a estos temas, estén o no efectivamente en vigor:

- La primera Directiva, del 9 de Marzo de 1972, se ocupa de las garantías que deben exigirse a las sociedades con el fin de proteger los intereses de los socios y de terceros.

- La segunda Directiva, del 13 de Diciembre de 1976, señala las garantías exigibles en los Estados Miembros a las sociedades en cuanto a su constitución, así como respecto del mantenimiento o las modificaciones de su capital.

- La tercera Directiva, del 9 de Octubre de 1978, se refiere a la coordinación de las legislaciones en lo referente a las fusiones de sociedades anónimas, garantizándose la debida protección de los derechos de los socios y de los acreedores, así como de los derechos de los poseedores de otros títulos de las sociedades fusionantes.

- La cuarta Directiva, del 25 de Julio de 1978, se ocupa de las cuentas anuales, constituyendo una auténtica "Carta Contable Europea", un avance considerable en la normalización informativa por sus esquemas obligatorios y contenidos mínimos del balance y sus anexos, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión.

- La quinta Directiva, propuesta por la Comisión primero el 28 de Setiembre de 1972 y por segunda vez (revisada) el 28 de Julio de 1983, se refiere a la estructura de las sociedades anónimas.

- La sexta Directiva se refiere a la escisión de sociedades anónimas en dos modalidades: por absorción o por constitución de nuevas sociedades, garantizando en ambos casos una protección equivalente a la contemplada para las operaciones de fusión.

- La séptima Directiva, del 13 de Junio de 1983, está orientada a coordinar las legislaciones sobre cuentas consolidadas.

- La octava Directiva, del 10 de Abril de 1984, se ocupa de la habilitación de las personas encargadas de la auditoría legal de los estados contables.

3) Armonización fiscal

En el Tratado de Roma se previó una cierta armonización fiscal, pero en manera alguna la completa

unificación. Se trataba simplemente de aminorar las diferencias entre los distintos sistemas tributarios nacionales para facilitar al máximo la libre circulación de bienes, personas y servicios dentro del Mercado Común.

Para preparar el desarrollo del Tratado de Roma en este importante campo, en Febrero de 1960 la Comisión constituyó un "Comité Fiscal y Financiero" que quedó bajo la presidencia del doctor Neumark. El mandato del Comité consistía en estudiar si las disparidades fiscales existentes impedían, y en qué grado, el efectivo funcionamiento del Mercado Común, y cuales serían las medidas con que podrían modificarse las situaciones no deseables. Como resultado de sus estudios, el Comité Neumark hizo público un informe en 1962 en cuya parte final se esbozaba un calendario "sin fechas" con la especificación de las operaciones en tres fases.

El cumplimiento del calendario sin fechas se hizo imposible, y fue sólo a mediados de los años setenta, en plena depresión en todo el ámbito de las Comunidades, cuando las cuestiones fiscales volvieron a ponerse en un primer plano, sobre todo considerando las necesidades de la unión económica y monetaria y las futuras actividades del Parlamento Europeo. En esa línea de necesidades, y previa consulta con las organizaciones profesionales y sindicales, y con las Administraciones fiscales nacionales, la Comisión Europea adoptó en Setiembre de 1975 un programa en materia fiscal que se resume seguidamente:

Impuesto sobre el valor agregado: Conveniencia de implantar métodos uniformes de recaudación, simplificación de los trámites en las fronteras intracomunitarias y solución de cierto número de problemas específicos (admisión temporal, reparaciones, venta por correspondencia).

Impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos: Se trataba de lograr una recaudación más uniforme de esta clase de impuestos, así como el aligeramiento de los trámites y fiscalizaciones.

Franquicias a favor de particulares: Lo que se buscaba era armonizar el ámbito de su aplicación y la adaptación periódica de su cuantía.

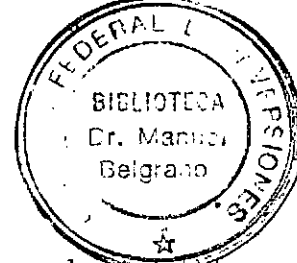
Impuestos directos: Se aspiraba a ir a la armonización de los sistemas de impuestos sobre sociedades, así como de los regímenes de deducción en los impuestos sobre dividendos.

Fraude y evasión fiscal internacional: La aspiración era conseguir una colaboración eficaz entre las Administraciones fiscales nacionales en la imposición indirecta, y en los impuestos indirectos, una asistencia mutua para el cobro de los créditos por vía de apremio.

En síntesis, en vez de establecer grandes metas demasiado ambiciosas, la Comisión con su programa de propuestas fiscales de Setiembre de 1975 lo que hizo fue plantear una serie de peticiones relativamente modestas pero de indudable interés, a efectos de ir configurando el nuevo marco fiscal común europeo.

En el tiempo transcurrido desde la fundación del Mercado Común no se han alcanzado resultados espectaculares en materia fiscal. La armonización prácticamente se ha visto reducida, hasta ahora, a la aplicación generalizada del IVA desde 1973 y sobre una base uniforme desde 1979.

Aparte del IVA hay otros impuestos y cuestiones fiscales en los que la Comunidad está avanzando también en la vía de la armonización:



- Tradicionalmente, determinados productos de amplio consumo han estado sujetos a tributación por medio de impuestos especiales, como el tabaco, combustibles, bebidas alcohólicas, café, té, cerveza, azúcar, etc. Desde el punto de vista de la libre circulación y la no discriminación en un determinado ámbito comercial, las diferencias en una fiscalidad de esta naturaleza pueden resultar perturbadoras. Por ello, la Comunidad se ha planteado el tema en relación con el tabaco y con las bebidas alcohólicas, si bien hasta ahora sólo se ha conseguido que los Estados Miembros armonizaran la imposición indirecta especial sobre el tabaco.

- En el Mercado Común, la franquicia en favor de viajeros se concede en relación con el IVA y los impuestos especiales, para permitir importaciones de efectos personales, entre los que se encuentran mercancías sin valor comercial u otras con valor hasta un cierto tope. Los límites son distintos según se trate de viajes entre países miembros o con terceros países y también hay un trato especial para residentes en zonas fronterizas de los países miembros. También se ha establecido una franquicia del IVA y de impuestos especiales para los pequeños envíos sin valor comercial.

- La diversidad de legislaciones fiscales sobre aportaciones de capital interfiere el principio de la libre circulación. Para resolver esa dificultad se dictó una Directiva el 17 de Julio de 1969 estableciéndose que dentro de la Comunidad las aportaciones a los capitales sociales no deberán gravarse más de una vez, debiendo hacerse con estructuras y tipos armonizados o en forma de timbres sobre títulos. Con ello se evita la discriminación, la doble imposición y las demás interferencias al libre movimiento. Las aportaciones de capital sólo se gravan en el país

miembro en cuyo territorio se encuentre el centro efectivo de dirección de la sociedad, siendo el momento para gravar aquél en que la transacción se efectúa.

- Una Resolución del Consejo del 10 de Febrero de 1975 previó el intercambio recíproco de informaciones y datos entre los Estados Miembros, así como la armonización de medios legales y administrativos para combatir el fraude y la evasión fiscal. Hay tres formas de intercambio de información: a petición, para casos concretos, automático, para casos que se determinen en el marco del procedimiento de consulta previsto y espontáneo, cuando se observen circunstancias sospechosas sobre la forma de contribuir.

- En lo concerniente al impuesto de sociedades, la armonización de los sistemas nacionales implica el acuerdo sobre una base tributaria común, y aún limitándose a las disposiciones de carácter puramente fiscal, la tarea es notable por las diferencias existentes entre las legislaciones.

4) Sistema Monetario Europeo (SME)

La decisión formal de crear un sistema monetario europeo se adoptó por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Nueve, en el transcurso del Consejo Europeo de Copenhague, los días 7 y 8 de Abril de 1978. El 6 de Julio de 1978, en Brémen, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos de nuevo en Consejo Europeo, confirmaron su decisión, precisaron las directrices del sistema y establecieron un calendario de trabajo.

El objetivo a alcanzar se definió como un sistema tendiente a establecer una cooperación más estrecha que desemboque en la creación de una zona de estabilidad en

Europa, quedando entendido que tal sistema tiene que ser duradero y eficaz.

Tras intensas negociaciones, el Consejo Europeo reunido en Bruselas los días 4 y 5 de Diciembre de 1978, adoptó una Resolución relativa a la instauración de un "sistema monetario europeo y a las cuestiones conexas". Seis Estados Miembros (Bélgica, Dinamarca, la República Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos) notificaron inmediatamente su participación, mientras que Italia anunció su adhesión el 13 de Diciembre e Irlanda el 15 del mismo mes. El Reino Unido declaró que no deseaba participar por el momento, pero que seguiría una política de cambios que garantizase la estabilidad de la libra esterlina con respecto a las demás monedas comunitarias.

Por último, el 12 de Marzo de 1979, el Consejo Europeo reunido en París, autorizó la puesta en marcha del Sistema Monetario Europeo (SME) que entró en vigor el 13 de Marzo de 1979.

De los dos objetivos que se querían alcanzar con los acuerdos del Sistema Monetario Europeo, el objetivo político, de avanzar hacia la Unión Europea, se ha logrado en parte. La colaboración monetaria entre los países del Mercado Común a nivel de Banco Centrales es muy asidua y cada vez más estrecha, y el Sistema Monetario Europeo es la causa principal de ello.

Por el contrario, el objetivo monetario, de crear una zona de estabilidad, está muy lejos de haberse conseguido. Por un lado, la estabilidad de los tipos de cambio entre las monedas del SME es muy relativa y por otro lado, la obligación de las autoridades monetarias nacionales de mantener el tipo de cambio dentro de los límites de

variación autorizados y las intervenciones que para ello se practican, se traducen necesariamente en una variabilidad extraordinaria de los tipos de interés y en movimientos rápidos e importantes en los flujos de capitales.

En 1981, después de casi tres años de existencia del SME, en su activo había que consignar la sensible disminución de las fluctuaciones de los tipos de cambio intraeuropeos. En el pasivo del SME se anotaron los fracasos inducidos por la falta de voluntad política de las Cancillerías europeas. No se avanzó en la deseable política común frente al dólar, no se apreciaron signos de convergencia económica ni acciones encaminadas a fomentarla, no se consiguió la participación de Gran Bretaña y además la creación de un auténtico Fondo Monetario Europeo se pospuso indefinidamente.

En resumen, el SME no pasa de ser un mero acuerdo de cooperación cambiaria, y su futuro depende de la credibilidad y flexibilidad del acuerdo en sí, y del progreso hacia nuevas etapas.

INTEGRACION FISICA

1) Política común de transporte

El 10 de Abril de 1961 la Comisión presentó al Consejo un "memorándum sobre la orientación a dar a la política común de transportes", al que siguió el 23 de Mayo de 1961 un "programa de acción en materia de política común de transportes". Aunque ninguno de esos dos textos fueron formalmente aprobados por el Consejo de Ministros, de hecho constituyeron la base misma de las normas del derecho derivado que se fueron promulgando. Ambos documentos preconizaron la igualdad de trato entre los distintos modos de transporte, empresas y usuarios, tanto en lo referente

al acceso al mercado como en lo concerniente a la formación de precios y a la libertad de elección por parte de los usuarios.

Como resultaba imposible pasar de forma brusca a un sistema de absoluta libertad, la decisión del Consejo del 14 de Diciembre de 1967 estableció tres etapas progresivas.

Para la primera etapa se propuso la adopción de las siguientes medidas:

- Armonización de las condiciones de trabajo en los transportes por carretera.

- Aplicación al transporte de las reglas de competencia.

- Reglamentación sobre ayudas al transporte.

- Supresión de la doble imposición a los vehículos automóviles.

- Uniformización de las disposiciones relativas a la admisión en franquicia del carburante contenido en los depósitos de los vehículos utilitarios.

- Creación de un contingente comunitario para los transportes de mercancías por carretera entre los Estados Miembros.

- Instauración de un sistema de tarificación en horquilla para los transportes de mercancías entre los Estados Miembros.

Para la segunda etapa se proyectaron las siguientes disposiciones:

- Normas relativas a la acción de los miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público.

- Normas relativas a la normalización de cuentas de los ferrocarriles.

Para la tercera etapa se pretendía lograr la regulación de los siguientes ítems:

- Armonización de las estructuras de los impuestos sobre vehículos.

- Contabilidad uniforme y permanente de los gastos relativos a las infraestructuras en los distintos modos de transporte.

El programa esquemáticamente expuesto anteriormente imponía una considerable reducción de los objetivos establecidos en 1961, y a pesar de ello sólo se cumplió con un retraso de dos a tres años sobre los plazos previstos, debido a la resistencia de los Estados Miembros a aplicar los acuerdos, en vista de lo cual, la Comisión presentó al Consejo el 24 de Noviembre de 1977 un programa de actividades (Informe "Seefela") conteniendo los objetivos prioritarios hasta 1980.

El Parlamento, por su parte, adoptó en Febrero de 1980 una Resolución para dar un impulso a la política común de transportes, al considerar que sus deficiencias comprometían el propio desarrollo de la Comunidad y en consecuencia, solicitó que con carácter prioritario se procediese a afrontar las siguientes tareas urgentes:

- Mejora de la situación financiera de los ferrocarriles, incrementando la cooperación entre ellos.

- Mejora del tránsito a través de Austria y Suiza, mediante una tarificación equitativa de los costos de infraestructura, de su modernización y con la utilización del transporte combinado.

- Defensa de los intereses de la navegación marítima de la Comunidad frente a la política expansionista de terceros países.

- Mejora de la seguridad del tráfico aéreo y adaptación de la política comunitaria a los importantes cambios previsibles en el escenario mundial.

- Reglamentación de las relaciones exteriores de la Comunidad en el campo de la navegación interior.

En cuanto al transporte marítimo, las áreas cubiertas por la reglamentación comunitaria son más bien limitadas. El Consejo de Ministros promulgó en este área una serie de reglamentos específicos: sobre procedimientos de consulta (19-9-1977), sobre actividades de terceros países (19-9-1977), sobre recogida de informaciones (19-9-1977), sobre pilotaje de navíos en el Mar del Norte (21-12-1978), sobre ratificación de convenios de seguridad de contenedores (15-5-1979) y sobre ratificación del código de conducta de las conferencias marítimas (15-5-1979).

Entre los avances logrados a lo largo de 1980 en materia de transportes, hay que reseñar la Directiva del Consejo de Ministros estableciendo una fecha única para el día de comienzo de la "hora de verano" en todos los Estados Miembros para 1981 y 1982, así como la creación de un modelo de permiso de conducir normalizado. Ambas cuestiones desbordan ampliamente el área de los transportes, ya que afectan a la generalidad de los ciudadanos comunitarios.

Por otro lado, el informe sobre "cuellos de botella" en las infraestructuras del transporte, solicitado por el Consejo de Ministros a la Comisión en Noviembre de 1978 y presentado el 19 de Junio de 1980, mostrando las principales insuficiencias, así como las medidas de inversión que los Estados Miembros estimaban necesarias.

Por último se debe señalar que el 23 de Abril de 1980, reunidos en la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT) los representantes de la Comunidad y de una larga serie de terceros países, se suscribió un acuerdo relativo al régimen aplicable al transporte internacional de viajeros por carretera y por medio de autocares y autobuses (Acuerdos de Servicios Ocasionales por Carretera - ASOR).

2) Política de desarrollo regional

El primero de los estudios sobre desarrollo regional realizados por la Comunidad fue hecho público en 1959. En dicho estudio, y sobre datos de la renta per cápita, se puso de relieve que las regiones más desarrolladas de la Comunidad estaban comprendidas en una zona de gran pujanza que se definía a lo largo de un eje Norte-Sur, desde Holanda hasta el Norte de Italia y entre los valles del Rin y del Ródano.

Esta franja, caracterizada por el nombre de Lotaringia Industrial, comprendía alrededor del 30,0% del territorio de la Comunidad, concentrándose en ella el 45,0% de la población y el 60,0% del producto social del Mercado Común.

También se destacó en el referido estudio que las regiones menos desarrolladas de la Comunidad son las periféricas, siendo su desarrollo menor a medida que están situadas más lejos de la zona central.

Durante la conferencia cumbre de París de 1972 fue cuando los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la CEE decidieron ir hacia una política regional comunitaria efectiva. Se decidió entonces invitar a la Comisión a que estableciese el inventario de los problemas regionales de la Comunidad y a que sometiese proposiciones para la creación de un Fondo Regional de Desarrollo.

El 3 de Mayo de 1973 la Comisión dió a conocer su informe que contenía los siguientes puntos principales:

Situación: El Tratado de Roma expresaba el deseo de una "expansión continua y equilibrada", pero si bien la expansión fue continua hasta 1973 no resultó equilibrada.

La Comunidad de los Seis logró una tasa de crecimiento elevada (5,4% como media anual de 1960 a 1970), pero el crecimiento no fue uniforme ni geográficamente equilibrado. Las zonas más ricas de la Comunidad disfrutaban en 1970 de un ingreso por habitante cinco veces mayor que el de las zonas más desheredadas. El subempleo estructural, así como un desempleo temporal muy alto, persistían en determinadas regiones, en mucha de las cuales la única salida seguía siendo la emigración.

Motivos psicológicos, ecológicos y económicos: La reducción de las diferencias entre las diversas regiones constituye uno de los objetivos fundamentales del Tratado de Roma, pero la política regional comunitaria no debería servir solamente a quienes habitan en las regiones de mayor pobreza relativa, sino también a los que viven en las grandes zonas urbanas superpobladas y con un entorno deficiente.

Desequilibrios regionales: La causa general de los desequilibrios regionales estriba en la ausencia de una

actividad económica moderna o en la dependencia excesiva de una actividad en decadencia que ya no garantiza la productividad o que no ofrece nuevos empleos.

Líneas directrices de la política a seguir: La política regional comunitaria no puede reemplazar a las políticas nacionales, sino que debe completarlas, y para garantizar el éxito de su política regional, la Comunidad debe coordinar los diferentes regímenes comunes, así como las políticas regionales de ámbito nacional.

Mecanismos del Fondo: Las ayudas financieras deberían enfocarse principalmente a los proyectos relativos a la industria, a los servicios y a las infraestructuras, que presentasen un interés regional particular o que se destinaran directamente a estimular la producción.

La política regional de la Comunidad incluye tres ejes principales que son los siguientes:

Consideración de los efectos regionales de las demás políticas comunitarias

Las políticas de la Comunidad en numerosos sectores (agricultura, industria, comercio internacional) tienen repercusiones en el plano regional y, por lo tanto, conviene evitar que el efecto de tales políticas vaya en contra de los objetivos del desarrollo regional.

Con ese fin se ha introducido en cada una de estas políticas una apreciación sistemática de sus consecuencias regionales con resultados, por ejemplo, en diversos aspectos del funcionamiento del Fondo Social Europeo y del FEOGA. También se han obtenido resultados mediante la realización de "operaciones integradas", que implican la intervención de varios

Fondos comunitarios de manera coordinada para el desarrollo de una zona particular.

Coordinación de las políticas regionales de los Estados Miembros

Desde luego, no es deseable imponer a los Estados Miembros una política de desarrollo uniformemente moldeada, pero ello no es óbice para que se coordinen las políticas nacionales, especialmente en lo relativo a las ayudas públicas al desarrollo regional.

Uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la coordinación lo constituyen los programas nacionales de desarrollo regional, que los Estados Miembros han de establecer de forma armonizada para cada una de las regiones que aspiren a ser ayudadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el fin de coordinar adecuadamente las intervenciones nacionales en favor del desarrollo regional, y además sirven de orientación para la utilización de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Intervenciones financieras de la Comunidad

La Comunidad dispone de varios instrumentos financieros que contribuyen a resolver los problemas de las regiones mediante la concesión de ayudas y préstamos.

- La CECA ha financiado la modernización de industrias del carbón y del acero, así como la atracción de nuevas industrias creadoras de puestos de trabajo a las regiones carboneras y siderúrgicas.

- El Banco Europeo de Inversiones tambien ha concedido préstamos a proyectos de desarrollo regional.

- Un nuevo instrumento comunitario de intervención (NIC) concede desde 1979 préstamos que sirven esencialmente para modernizar las infraestructuras y desarrollar los recursos energéticos.

- En el marco del Sistema Monetario Europeo se han facilitado bonificaciones de interés a favor de los Estados Miembros menos prósperos, que se han podido beneficiar así de préstamos a interés reducido.

- El Fondo Social Europeo y la CECA han concedido conjuntamente ayudas no reembolsables en favor de la capacitación y de la reconversión de los trabajadores.

- El FEOGA-Sección Orientación otorga ayudas para modernizar las estructuras agrícolas de producción y de distribución.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional es el único instrumento comunitario que tiene como finalidad exclusiva contribuir al desarrollo de las regiones desfavorecidas.

Las solicitudes de ayuda al Fondo sólo pueden ser presentadas por las autoridades nacionales de cada Estado Miembro y las inversiones proyectadas han de formar parte de los programas de desarrollo regional. Las ayudas del Fondo son abonadas a las autoridades nacionales, las cuales pueden, conforme a las disposiciones del reglamento que rige las actividades del Fondo, o bien transferirlas a los inversionistas,

o bien considerarlas como un reembolso parcial de sus propias ayudas nacionales con fines regionales.

En todos los Estados Miembros, las ayudas a las inversiones industriales son manejadas por las autoridades nacionales, mientras que para las inversiones de infraestructura, las ayudas son transferidas, en la mayoría de los casos, a las autoridades locales, aunque la práctica varía entre los distintos países.

3) Medio Ambiente

En este apartado se procederá a exponer algunos de los aspectos de la política medioambiental, tanto a nivel de los Estados Miembros como en lo que respecta a las medidas comunitarias.

Medidas Nacionales

Santuarios de pájaros: La dramática disminución del número de aves silvestres y la desaparición de especies enteras en Europa, no se debe solamente a la caza, a los insecticidas y a la contaminación. Es algo que proviene, sobre todo, de la reducción de los "habitats" en que los pájaros pueden anidar y recuperar fuerzas en sus grandes migraciones anuales, particularmente en las zonas húmedas.

Para hacer frente a un problema como éste, de gran alcance ecológico, en 1975 se elaboró en el marco de la UNESCO el llamado Convenio de Ramsar, al que se han adherido todos los países de la Comunidades Europeas, y que tiene por finalidad proteger los humedales de importancia internacionales.

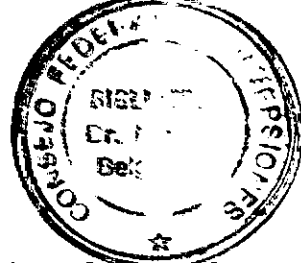
Dinamarca, que se ha adherido al Convenio en 1978, ha creado en su territorio 26 zonas húmedas con una superficie total de 4.000 kilómetros cuadrados, representativas de aproximadamente un 10,0% del territorio nacional. Italia también ha promovido 26 zonas húmedas, que totalizan 26.000 hectáreas y, en la misma dirección, Irlanda ha multiplicado los "santuarios" para pájaros a través del país.

Reservas y parques nacionales y naturales: Francia ha creado un estatuto particular para ciertos territorios en los que se protegen las poblaciones animales y vegetales, así como las formaciones geológicas más notables, habiendo prohibido en ellos construir, cazar, pescar y recoger frutas. Estas zonas protegidas pasaron de 36 en 1978 a 50 en 1980, abarcando cerca de 18.000 hectáreas.

En análoga dirección, el Ministerio de Agricultura italiano adoptó un ambicioso programa que permitió multiplicar las reservas naturales, para pasar de 103 en 1979 con 62.000 hectáreas a más de 80.000 hectáreas en 1988.

Por otro lado, mientras que Francia creaba en 1979 su sexto parque nacional de 30.000 hectáreas, el Ministerio de Agricultura italiano decidía la creación de ocho nuevos parques nacionales con una superficie de 20.000 a 60.000 hectáreas para cada uno de ellos, totalizando en conjunto 280.000 hectáreas.

Eliminación de desechos: En 1975 el gobierno alemán puso en marcha un programa global de eliminación de desechos, de carácter integrado, que se convirtió en modelo de referencia para el conjunto de los países europeos. Sus más significativos elementos



son la elaboración de planes regionales de tratamiento, establecimiento de un sistema de registro de almacenamiento y transporte para 85.000 empresas, obligación de que cada empresa nombre un responsable en la materia, centros regionales de reciclado, etc.

Algunos resultados cabe calificarlos de espectaculares. En lo que respecta a los desechos de origen doméstico, entre 1976 y 1980 el tonelaje de las botellas recuperadas por la población alemana pasó de 300.000 a 450.000 toneladas. Para ello se repartieron, a través del territorio federal, 15.000 contenedores, estimándose que las botellas de cerveza y de agua mineral que se retornan suponen el 95,0% del total.

Dinamarca fue aún más lejos. Ya desde 1971 había legislación que prohibía la venta de soda en cascós sin retorno. Después, la industria cervecera se comprometió a reducir gradualmente la venta en cascós sin retorno, y a partir de 1981 aceptó de buen grado la prohibición de las latas metálicas.

Se calcula que el reemplazo de cada botella de cerveza es en promedio de 33 veces por año, y que su período de vida alcanza a cuatro años, mientras que para las botellas de soda, las cifras se sitúan en 36 reemplazos anuales y seis años de uso, efectuándose el retorno en un 99,0%.

Agua: Actualmente, el agua es el medio más afectado por la industrialización, y por ello, los países europeos se han esforzado en incidir en las causas originantes, a fin de limitar los vertidos. Con ese objeto se han creado agencias con poderes sobre cuencas fluviales completas, se han constituido miles de depuradoras y hay un riguroso sistema de licencias

de vertidos industriales, y se ha puesto en marcha un control cada vez más estricto de las normas de vertido, de las sanciones por contaminación, etc.

En materia de prevención y depuración, en los años sesenta el problema esencial fue el de los detergentes. Durante los años setenta, en los países de la Comunidad se generalizaron las reglas severas contra los elementos minerales vertidos o desechados por la industria, sobre todo los nitratos y fosfatos. Durante los años ochenta, la atención se centra fundamentalmente en los microorganismos, cuya presencia alcanza altas concentraciones en ciertos organismos vivientes (mejillones, truchas, etc.).

Aire: La calidad del aire puede medirse con precisión merced a las redes de sensores que hoy funcionan en todos los países de la Comunidad. Precisamente, esos sensores demuestran que contrariamente a lo apreciado para el agua, las reducciones en lo tocante a las partículas en suspensión de ciertos contaminantes, como el dióxido de azufre, no se hallan definitivamente aseguradas de cara al futuro.

Acción de la Comunidad

De acuerdo con la Declaración del Consejo Europeo del 22 de Noviembre de 1973, para "mejorar el medio, la calidad y las condiciones de vida", en el Primer Programa de Acción sobre Medio Ambiente se establecieron tres categorías de acciones: las dirigidas a reducir la contaminación y los daños, las encaminadas a mejorar las condiciones de vida y las referentes a acciones internacionales.

Estaba previsto que tales actuaciones se desarrollaran en el plazo de dos años, pero la aprobación del Programa más tarde de lo previsto originó un cierto retraso y además se constató la desproporción entre los objetivos del Programa y los medios efectivamente disponibles.

El 17 de Mayo de 1977 el Consejo Europeo adoptó el Segundo Programa de Acción para el período 1977-1981, dedicándose particular atención a lo preventivo, sobre todo en lo concerniente a la contaminación, ordenación espacial y gestión de desechos.

El Tercer Programa de Acción se adoptó el 7 de Febrero de 1983 con vigencia para el período 1982-1986, en la misma línea de las actuaciones anteriores.

Las normas dictadas por la Comunidad, teniendo como punto de referencia los tres programas de acción citados, estuvieron dirigidas a regular distintos sectores. También se plantearon acciones generales, con incidencia en diversas áreas o en relación con otras políticas comunitarias, así como acciones a nivel internacional.

Acciones generales: Una Resolución del Consejo de Ministros del 24 de Junio de 1975 especificó la lista de contaminantes del aire y del agua a estudiar por la Comunidad, la Resolución del Consejo del 3 de Marzo de 1975 sobre energía y medio ambiente, reguló las relaciones entre ambos para promover la mejor calidad de vida, y la Directiva del Consejo del 24 de Junio de 1982 relativa a los riesgos de accidentes mayores de ciertas actividades industriales, relacionó la salud y la seguridad en el trabajo con el medio ambiente.

En el ámbito de las acciones generales, podemos incluir también la Recomendación del Consejo del 19 de Diciembre de 1978 sobre los métodos de la evaluación de costos en la lucha contra la contaminación en la industria. Esa labor la continuó con su Reglamento del 28 de Junio sobre ayudas financieras a proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías limpias, puesta a punto de nuevos métodos de medida de la calidad medioambiental y restablecimiento o mantenimiento de biotopos gravemente amenazados de especial importancia.

Por último, dentro de las acciones de carácter general, no se puede dejar de mencionar la Directiva del Consejo del 27 de Junio de 1985 relativa a la evaluación de los impactos de los proyectos públicos y privados, que constituye la norma comunitaria más importante en política preventiva.

Acciones sectoriales: El primer paso en cuanto a la regulación de productos peligrosos en los vertidos al agua, lo constituyó la Directiva del Consejo del 4 de Mayo de 1976, que estableció la obligación para los Estados Miembros de eliminar el uso de las sustancias incluidas en dos listas.

La Lista I relaciona los contaminantes a eliminar por su toxicidad, persistencia o bioacumulación y la Lista II comprende los que tienen efectos dañinos en función de las características de las aguas de recepción y de su localización. Todo vertido con sustancias de ambas clases debe someterse a autorización previa.

En materia de agua de los cursos fluviales, el Rin ha sido objeto de consideración especial por parte

de la Comunidad. A través de la decisión del Consejo del 25 de Julio de 1977, se aprobó la Convención relativa a la protección del río contra la contaminación química, que completó el acuerdo firmado en Berna el 29 de Abril de 1963 creando la Comisión Internacional de Protección del Rin contra la contaminación.

Adicionalmente, por decisiones del 24 de Junio de 1982 y del 27 de Junio de 1985, se acordaron protocolos complementarios a la Convención de 1973 para determinados elementos químicos (mercurio y cadmio). Los graves accidentes de 1986 que se generaron en Suiza a pesar de todas las prevenciones referenciadas, tuvieron grandes secuelas en los países de la Comunidad ribereños del Rin.

Los objetivos de calidad de las demás aguas comunitarias han sido fijados por diversas Directivas. La primera de ellas, la del 16 de Junio de 1975, se refirió a las destinadas al consumo humano en los Estados Miembros. Asimismo, se ha concedido importancia a los problemas del medio marino, en especial del Mar Mediterráneo y del Mar del Norte.

Las acciones se han centrado principalmente en la participación en convenciones internacionales: la Convención de París de 1974 para la prevención de la contaminación marina y la Convención de Barcelona de 1976 para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación. Por otra parte, por Resolución del Consejo del 26 de Junio de 1978, se adoptó un programa de acción para el control y la reducción de la contaminación por vertidos de hidrocarburos.

En cuanto al aire, desde el inicio de la política medioambiental comunitaria, se han conseguido algunos progresos. Cabe citar las siguientes Directivas del Consejo: la del 15 de Julio de 1980, sobre el anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión, la del 3 de Diciembre de 1982, sobre plomo y la del 27 de Marzo de 1985, sobre óxidos nítricos.

La normativa comunitaria ha prestado también su atención a los gases de los vehículos de motor (monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno), así como a las emisiones de los motores diesel destinados a la propulsión de vehículos y de tractores agrícolas, sin olvidar las Directivas que fijan los contenidos de azufre en ciertos combustibles líquidos como el gasoil y del plomo en la gasolina.

Por las graves secuelas de la contaminación atmosférica (lluvia ácida que afecta a bosques, monumentos y a la propia vida humana), la normativa comunitaria ha ido adquiriendo gran importancia. La Directiva del 28 de Junio de 1985, estableció la necesidad de que los Estados Miembros sometan a una autorización previa a determinadas industrias, con el fin de contener las lluvias ácidas y sus efectos devastadores en los bosques, los cultivos, los ecosistemas acuáticos y los edificios.

Este problema ya se había considerado al firmarse el 14 de Noviembre de 1979 la Convención de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, y su protocolo relativo a la financiación del programa de cooperación para la vigilancia y evaluación del transporte a larga distancia de contaminantes atmosféricos en Europa.

La capa de ozono de la atmósfera, también ha sido objeto de preocupación por parte de la Comunidad. Una vez conocidos los efectos nocivos de los clorofluorocarbonos, se reguló su uso principalmente en los aerosoles, mediante una decisión del Consejo de Marzo de 1980.

Las acciones sobre residuos se iniciaron en 1975, con dos Directivas del Consejo, una de carácter general del 15 de Junio y otras más concreta sobre eliminación de aceites usados del 16 de Junio. La primera obligó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para promover la prevención, reciclado y transformación de residuos, y asegurar su eliminación sin poner en peligro la salud o el medio ambiente.

El 20 de Marzo de 1978 se aprobó la Directiva del Consejo sobre residuos tóxicos y peligrosos y con ella se estableció la prohibición de vertidos incontrolados, la obligación de etiquetaje de residuos, la necesidad de la autorización de su almacenaje, tratamiento y eliminación, el control de su transporte y la planificación de su eliminación. Esa Directiva se completó por otra del 6 de Diciembre de 1984, reguladora de la vigilancia y el control en el interior de la Comunidad de las transferencias transfronterizas de residuos peligrosos.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de Diciembre de 1981 una Recomendación dirigida a los Estados Miembros y a las instituciones comunitarias para promover la utilización de papeles y cartones reciclados.

Por otra parte, y en el ámbito de la cooperación internacional, la Comunidad concluyó un acuerdo de cooperación con Suecia, relativo a la investigación y desarrollo del reciclado de residuos municipales e industriales.

El 22 de Noviembre de 1983 el Consejo aprobó una Directiva sobre aproximación de legislaciones de los Estados Miembros relativas a los detergentes.

Protección del espacio: En el Tercer Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (1982-1986) se ha concedido importancia a la conservación de la fauna y la flora, indicando la protección de pájaros salvajes, la prohibición de importaciones de pieles de "bebés focas" y, sobre todo, la participación en convenciones internacionales sobre el rechazo en el comercio internacional de especies de fauna y flora salvajes amenazadas de extinción, conservación de las especies migratorias, de la vida salvaje y del medio natural en Europa, y de la fauna y flora marinas del Antártico.

La Comunidad ha emprendido, asimismo, algunas acciones en materia de cooperación con países del Tercer Mundo, reconociendo la relación entre medio ambiente y desarrollo económico. Ya en el Tercer Programa de Acción se fijaron algunos objetivos prioritarios, como ser la conservación de los bosques tropicales, la lucha contra la desertificación, la gestión de aguas, las instalaciones de sistemas agrícolas, los usos de energía compatibles con el medio y la atención a las actividades de educación e información.

Históricamente, los Programas de Acción de la Comunidad sobre Medio Ambiente, fueron evolucionando en su

carácter. Los de 1973 y 1977 se centraron básicamente en la búsqueda de respuestas inmediatas a ciertos problemas, y el de 1983 ya planteó una estrategia global y preventiva. El Cuarto Programa (1987-1992) sin dejar de mantener esa tónica, se propuso ir más lejos: hacer de la protección un elemento esencial de toda la política económica (industrial, agrícola y social) como aporte importante al crecimiento económico y al empleo.

COMPETENCIA Y CONSUMIDORES

1) Política de competencia

En defensa de la economía competitiva, para los Tratados de París y Roma son incompatibles con el Mercado Común los acuerdos restrictivos de la concurrencia entre empresas, las decisiones de las asociaciones de empresas con el mismo fin y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados Miembros o que tengan como objeto o efecto impedir, restringir o falsificar el juego de la competencia en el interior del Mercado Común.

Esta prohibición general afecta tanto a las empresas comunitarias como a las de terceros países y lo mismo a las privadas como a las públicas.

Desde 1962 la Comisión interviene contra prácticas restrictivas muy diversas:

Acuerdos de reparto de los mercados: Se trata de cárteles que instituyen cotos cerrados a escala nacional, basados en el principio de "cada uno en su propia casa". Entre los que se han prohibido cabe citar el de los productos de quinina (1969) y el de los fabricantes de azúcar (1973).

Acuerdos de fijación de precios comunes: De esta categoría se prohibieron pactos como el de los fabricantes de colorantes (1969) quienes con más del 80,0% de cobertura del mercado europeo se pusieron de acuerdo para aumentar sus precios de manera uniforme y casi simultánea, lo cual dió lugar a la primera condena de una sociedad con domicilio social fuera de la Comunidad.

Consortios de venta: Se caracterizan por la exclusiva otorgada a un intermediario común, que fija cupos de suministro y que sobre esa base uniforma los precios de venta. El resultado es que se suprime toda competencia entre los miembros del consorcio, privándose así a los compradores de posibilidades de auténtica elección. Esto es lo que sucedió en 1978 en el caso del consorcio holandés de abonos nitrogenados, cuya disolución decidió la Comisión.

Convenios que estipulan obligaciones colectivas de compra o de suministros exclusivos: Estos convenios, practicados en muy diversos mercados, han sido condenados por la Comisión por suponer el levantamiento de barreras al libre comercio.

Acuerdos relativos a los derechos de propiedad industrial y comercial: Estos derechos no pueden servir para justificar prácticas que limiten la libre competencia. El asunto "Pentacon", que por primera vez implicó a empresas de un país del Este, permitió a la Comisión Europea reafirmar su posición en 1978, determinando que la concesión de una licencia a título exclusivo puede, en algunos casos, comportar una restricción excesiva de la competencia.

Acuerdos de distribución exclusiva o selectiva: En 1964 la Comisión condenó un acuerdo que confería al distribuidor Consten una exclusiva absoluta para la venta

de los productos Grundig en Francia. En cambio, la Comisión aceptó los sistemas de distribución creados por firmas como BMW u Omega, por entender que comportaban garantías de un mejor servicio postventa.

Concentraciones y abusos de posición dominante: Los Tratados europeos prevén que es "incompatible con el Mercado Común, quedando por tanto prohibido, en la medida en que el comercio entre Estados Miembros puede resultar afectado por ello, el hecho de que una o más empresas exploten abusivamente una posición dominante en el Mercado Común o en una parte sustancial del mismo".

La aplicación de esta norma a las operaciones de concentración se remonta al asunto Continental (1971-1973) cuando el Tribunal Europeo de Justicia resolvió, a pesar de absolver al gran productor estadounidense de embalajes, que ciertas concentraciones podrían constituir en sí mismas un abuso de posición dominante.

Empresas públicas: La Comunidad contaba en 1962 con 18 monopolios nacionales de carácter comercial, relativos a productos tan diversos como potasa, pólvora y otros explosivos, alcoholes y tabacos. Aparte de la imposibilidad de mantenerse monopolios públicos y la obligación por tanto de garantizar el libre acceso a todos los mercados, los Tratados son neutros con respecto al régimen de propiedad.

Ayudas públicas a empresas: Las ayudas públicas a las empresas, tanto de carácter estatal como privadas, son incompatibles con el Mercado Común, en la medida en que pueden afectar a los intercambios entre los países miembros, perjudicando a otras empresas del mismo sector. Sin embargo, ciertas ayudas son admitidas cuando se trata de corregir desequilibrios regionales o cuando se aspira a adaptar determinadas industrias. En este último caso se han

definido orientaciones específicas para cuatro sectores: construcción naval, textil, fibras sintéticas y siderurgia.

2) Consumidores

A la Comunidad compete uniformar las reglamentaciones protectoras para garantizar el buen funcionamiento del Mercado Común y los intereses del consumidor.

En 1972 los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad reunidos en París, expresaron por primera vez la idea de que el desarrollo económico no es un fin en sí mismo, sino que debe contribuir a mejorar la calidad de vida. Sobre sus bases, en 1973, la Comisión creó un servicio de medio ambiente y de protección del consumidor, y asimismo, constituyó un Comité Consultivo de Consumidores, para hacer las veces de portavoz de estos últimos.

El Programa Comunitario de Protección e Información del Consumidor, elaborado por la Comisión en 1974 y aprobado por el Consejo en 1975 con el dictámen favorable del Consejo Económico y Social, constituye una especie de carta de derechos a nivel europeo, así como un plan de acción tendiente a garantizar la protección de los consumidores en toda la Comunidad. Los derechos allí definidos fueron los siguientes:

Protección de la salud y de la seguridad: En condiciones normales, los bienes y servicios al consumidor no deben presentar peligro alguno.

Protección de los intereses económicos: El consumidor debe hallarse protegido frente a los posibles abusos de los vendedores (publicidad, cláusulas de contratos, créditos, etc.) y frente a los productos defectuosos o servicios deficientes.

Daños y perjuicios: El consumidor debe recibir asesoramiento y asistencia en caso de lesiones o daños causados por productos o servicios defectuosos, así como una rápida indemnización por los perjuicios sufridos.

Información y educación: El consumidor debe disponer de información suficiente para elegir con conocimiento de causa y para exigir, en su caso, la reparación que le corresponda. La educación al consumidor debe comenzarse desde la primera edad.

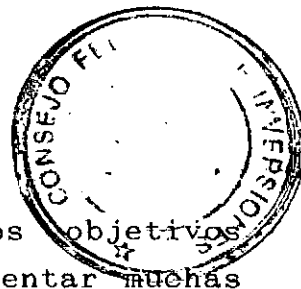
Derecho a la representación: Los consumidores deben ser consultados y vinculados a las decisiones que les afectan.

Uno de los obstáculos para el desarrollo de la acción comunitaria en términos de protección de los consumidores, lo constituye el hecho de que los gobiernos y los medios industriales manifestaron que el costo de las reglamentaciones se convertía en una carga financiera suplementaria para las empresas.

Otro de los obstáculos ha sido el argumento de que una buena parte del tema de protección a los consumidores es un asunto propio de los gobiernos nacionales y no de la Comunidad.

Una tercera influencia negativa para la defensa del consumidor fue la obligación de decidir por unanimidad para realizar la aproximación de las legislaciones en esta materia, lo que ocasionó largos retrasos en la adopción de medidas por el Consejo de Ministros.

A la obligación de resolver por unanimidad se le añade la complejidad de los procedimientos de consulta interinstitucional y la necesidad de consultar a los grupos de productores y a las organizaciones de consumidores.



Un cuarto origen en el retraso de los objetivos previstos radicó en la práctica usual de presentar muchas propuestas sobre reglas, cada una de ellas para una limitada gama de productos o de ingredientes.

POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGETICA

1) Política industrial común

La crisis de 1973, que se sintió con gran intensidad en las Comunidades, especialmente en los sectores siderúrgico, textil y de la construcción naval, fue la que promovió toda una serie de acciones concretas en materia de política industrial.

Siderurgia

Ante la caída de la demanda, la siderurgia comunitaria, sobredimensionada y con graves defectos estructurales, se encontró con un exceso de capacidad, cifrable en cerca de 60 millones de toneladas métricas de acero, y con perspectivas a corto y mediano plazo de serio agravamiento.

Para afrontar la situación, la Comisión elaboró una estrategia común conocida con el nombre de Plan Davignon, por el nombre del entonces Comisario de Asuntos Industriales, que se centró en dos acciones: establecimiento de una severa disciplina en el interior de la Comunidad y concertación con terceros países suministradores.

En su acción interior el Plan limitó las capacidades y fijó precios mínimos para algunos productos (redondos de construcción, bobinas calientes y perfiles comerciales) y también se ocupó de las ayudas estatales y de la potenciación de la política

social de cara a los trabajadores afectados por las reestructuraciones.

La limitación de las capacidades se realizó a través del llamado Programa Provisional, con una evaluación trimestral de las necesidades de producción a nivel comunitario, de acuerdo con estimaciones de consumo interior, exportaciones e importaciones, para después proceder a una distribución indicativa por empresas.

La fijación de precios mínimos, junto con el control de la oferta, contribuyó a impedir el derrumbamiento del mercado. Aunque tales precios fueron objeto de fuerte resistencia por parte de muchas empresas, que por urgentes dificultades de tesorería estaban dispuestas a ofertar por debajo de sus niveles. Por ello, la Comisión se vió en la necesidad de establecer el control sobre la base de "certificados de conformidad" expedidos por las propias empresas y vigilados por inspectores CECA. Las infracciones descubiertas fueron severamente sancionadas, de modo que la casi totalidad de las empresas pasaron a cumplir con sus compromisos.

En el área de lo social, el Plan Davignon se articuló en varias medidas para atender a los obreros cesados en sus puestos de trabajo en el sector. Para facilitar su futuro se previeron nuevos mecanismos: reeducación profesional, financiación por gastos de reinstalación, complementos salariales a los nuevos puestos de trabajo con remuneración inferior al precedente, ayudas a las empresas para asegurar el pago de su personal en paro temporal o por cambio de actividad, jubilaciones anticipadas, adopción de

nuevas formas de trabajo a tiempo parcial y limitación de las horas extraordinarias.

Todo el conjunto de medidas interiores se complementó con acuerdos suscriptos con los principales países suministradores de productos siderúrgicos, con el fin de controlar "voluntariamente" sus exportaciones.

Industria Textil

En el sector textil, la clave de la política anti-crisis radica en la contención de la oferta extracomunitaria y, a tal efecto, la Comunidad firmó acuerdos bilaterales con los principales países proveedores enmarcados en el Acuerdo General Multifibra del GATT. En tales convenios bilaterales se fijan "objetivos de exportación" para diferentes categorías de productos e incluso el reparto geográfico de las importaciones entre los diferentes países comunitarios.

Al tiempo que se frena la oferta exterior, las empresas comunitarias deben especializar sus producciones en los artículos que por su calidad, moda o tecnología, puedan soportar mejor la competencia exterior.

Construcción Naval

Probablemente este sector fue el más gravemente afectado por la crisis. La caída de los fletes, y la consiguiente contracción de la cartera de pedidos, coincidió con el acceso al mercado de países de tecnología media que, gracias a sus bajos costos salariales y a las ayudas estatales, pusieron en duro aprieto a los astilleros europeos.

Las medidas tomadas por las Comunidades para contrarrestar la crisis, consisten en asimilar los astilleros a zonas francas, de modo que puedan adquirir los productos que necesiten en los mercados internacionales que prefieran sin satisfacer derechos de aduana. Lógicamente, se prohíben las ayudas estatales destinadas a aumentar la capacidad de producción, pero sí se autorizan intervenciones especiales de salvamento cuyo objetivo sea mantener empresas que en caso de desaparecer crearían problemas de carácter social.

Tecnología

Al margen de las acciones concretas destinadas a la reestructuración y reconversión de los tres sectores industriales analizados, en las Comunidades se ha tomado conciencia de un problema que amenaza seriamente el futuro de Europa como potencia industrial: el desfase tecnológico en los sectores de punta y muy en particular en los de informática, telemática, electrónica y construcción aeronáutica y aeroespacial, todo ello debido a la carencia de una política industrial común, a la atomización irracional y, sobre todo, a la falta de un esfuerzo coordinado, a diferencia de los Estados Unidos y Japón.

En la aeronáutica se aspira a la preparación de un programa común que coordine los programas nacionales, con el fin de evitar duplicidades innecesarias y para promover la acción común que asegure el empleo de aviones comunitarios en las líneas aéreas europeas.

También entre las actividades de previsión tecnológica de la Comisión tiene un gran interés el

llamado Programa FAST (Forecasting and Assessement in the field of Science and Technology), que concentra sus análisis en los temas a mediano plazo que plantean cuestiones como la energía y el empleo, y dos mutaciones que podrán transformar profundamente la sociedad en el curso de los próximos decenios: la informática y la biotecnología.

El Programa FAST, como afirma Guido Brunner, ha servido para tomar conciencia del reto tecnológico que la Comunidad debe asumir para afrontar sus grandes insuficiencias, que se reflejan en una dependencia del 55,0% para la energía y del 75,0% para las materias primas.

Por lo demás, en los trabajos del Programa FAST se ha podido constatar que en la Europa Comunitaria el esfuerzo en investigación y desarrollo se reparte aproximadamente en partes iguales entre el sector público y el privado, con la particularidad de que en algunos países occidentales, de ese total en investigación y desarrollo, el 25,0% se dedica a los sectores militar y espacial.

El porcentaje del PBI que en los países de las Comunidades se destina a investigación y desarrollo es aceptable (1,9%), pero menor que en los Estados Unidos y Japón, donde alcanza cotas del 2,3% y del 2,0% repectivamente. Sin embargo, la distribución del esfuerzo en investigación y desarrollo dentro de la Comunidad es muy desigual.

Lo más preocupante quizás sea la circunstancia de que la investigación europea se encuentra muy fragmentada y falta de coordinación, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos y Japón.

En el tema de la investigación y desarrollo tiene un gran interés la actividad del Centro Conjunto de Investigación para Cuestiones Atómicas, que se estableció de conformidad con el Tratado del Euratom y que entró en funcionamiento en 1960. Actualmente el Centro dispone de cuatro establecimientos: Geel en Bélgica, Ispra en Italia, Karlsruhe en la República Federal de Alemania y Petten en Holanda, y entre todos ellos emplean alrededor de 1.800 científicos y técnicos y 450 personas más en actividades administrativas.

El Centro ha registrado en sus primeros dieciocho años de funcionamiento un total de 500 patentes y ha hecho públicos más de 3.000 documentos para facilitar información.

Todas las medidas y aspiraciones comunitarias tropiezan con las grandes ventajas que para las empresas tiene la importación de componentes de Japón y de otros países.

A esas empresas les resulta más rentable comprarlos a una compañía japonesa que les fabrica el producto siguiendo sus especificaciones y que permanecerá en el anonimato, y vender sus fabricaciones mixtas únicamente con su propia marca. Los principales fabricantes europeos de productos electrónicos vienen haciendo esto desde finales de los años cincuenta, si bien la tendencia tiende a agudizarse hasta el punto de que muchos en el área de sonido y televisores, dependen en más del 50,0% de los proveedores japoneses.

Armonización técnica

Además de las políticas sectoriales ya analizadas, las Comunidades abordaron acciones de carácter horizontal, tendientes tanto a la eliminación de los obstáculos a los intercambios intracomunitarios de productos industriales como a promover integraciones empresariales. En esa dirección se aspira a unificar el mayor número posible de normas técnicas.

Hay varios cientos de normas técnicas ya armonizadas, existiendo otras muchas en proyecto. Los principales sectores o productos regidos por estas normas son los siguientes:

Instrumentos de medida: La Comunidad ha adoptado Directivas relativas a los contadores de gas, agua, electricidad, unidades de medida, alcohómetros, taxímetros, arqueos de las cisternas de barcos, etc.

Sector químico: La mayor parte de las Directivas en este sector tienen como objeto aumentar la seguridad de los utilizadores y proteger el medio ambiente. A tales efectos, se ha clasificado un millar de sustancias peligrosas según su toxicidad y se han adoptado normas relativas a su etiquetado, mientras que también la tasa mínima de biodegradabilidad de los detergentes ha sido objeto de una Directiva. Además, se han regulado los requisitos para limitar la venta y el empleo de ciertas sustancias peligrosas.

Sector textil: Una Directiva-Marco define el derecho a las apelaciones "pura lana virgen", "seda natural", "lana mezclada", etc. Además, están

reglamentados los métodos de análisis que sirven para establecer la composición de los textiles mezclados.

Sector alimentario: Están reguladas las denominaciones controladas, como es el caso de la miel, jugos de frutas, cacao y chocolate. Además, existen otras normas cuyo objetivo es la protección de los consumidores frente a los aditivos, como ser colorantes, agentes conservadores, gelificadores, emulsionantes, etc. Otra Directiva define determinadas informaciones relativas al peso, a la fecha de validez del producto, a los aditivos, etc.

Material eléctrico: En este sector la armonización no ha avanzado mucho. En 1973 la Comunidad, a través de una Directiva, dió a los organismos nacionales de normalización el mandato de elaborar conjuntamente normas uniformes, pero el proyecto, teóricamente interesante, no ha dado los resultados esperados. Hasta ahora sólo se ha conseguido la armonización total en el campo de las perturbaciones radioeléctricas provocadas por los aparatos electrodomésticos y las herramientas eléctricas.

Sector automóvil: El objetivo principal de la Comunidad en este sector es el de garantizar la seguridad de los vehículos.

Pequeñas y Medianas Empresas

Debe destacarse, por sus repercusiones en todo el sector industrial, la política comunitaria de apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYMES), que pretende favorecer la integración de las PYMES con el objeto de facilitar su financiación, permitir la investigación,

desarrollar las técnicas de marketing, especializar las producciones y, en definitiva, abaratar los costos de fabricación y de comercialización, así como impulsar la creación de empresas transnacionales europeas de dimensiones y capacidades competitivas con las grandes multinacionales extraeuropeas.

En relación a las PYMES la política comunitaria se reflejó en el Informe Nontebon que el Parlamento aprobó en Febrero de 1978, en el cual se reconoció el importante papel que desempeñan estas empresas en épocas de crisis, en virtud de su mayor flexibilidad y capacidad de ajuste a las nuevas condiciones del mercado.

En el Informe se recomendaba adoptar medidas específicas para ayudar a las PYMES a superar sus desventajas y para situarlas en condiciones más equitativas en relación con las grandes empresas en el campo financiero y fiscal. Con esos objetivos la Comisión aspiró a potenciar un marco legal específico a nivel laboral, fiscal y de régimen jurídico de las sociedades, para permitir la cooperación y la concentración de las empresas existentes a fin de que puedan adaptarse de manera permanente a la evolución del mercado.

En esa línea de actuación fue constituido, en el marco de la Comisión, el GEC (Groupement Européen de Cooperation) para el desarrollo de la cooperación entre empresas de distintas nacionalidades, eliminando las trabas de orden jurídico y fiscal, y asegurando a los trabajadores de esas empresas la protección de sus intereses sociales.

Por su parte, el llamado Bureau de Mariages es otro instrumento de origen comunitario que trata de promover el acercamiento de las empresas de los Estados Miembros entre sí. A la misma política responde la Agencia Europea de Servicios, cuyo fin es fomentar la transferencia de tecnología, los intercambios industriales o comerciales y la cooperación industrial.

En relación a la creación y desarrollo de empresas transnacionales europeas, la política comunitaria se basa en una Comunicación de la Comisión al Consejo de Noviembre de 1973, en la que se reseñan las acciones que permiten resolver los problemas derivados de la ausencia de armonización fiscal, de la falta de homologación de las normas técnicas, de la inexistencia de un mercado europeo de capitales y de la indisponibilidad de información adecuada.

Programas Comunes de Investigación y Desarrollo

El Consejo de Ministros fue aprobando sucesivos Programas para garantizar la presencia de la Comunidad en los principales frentes de las nuevas tecnologías. Merecen especial mención los Programas que a continuación se detallan:

Programa ESPRIT (European Strategic Programme for Information Technologies): Este Programa contribuye a que Europa responda al reto de la competencia exterior en el campo de las tecnologías de la información.

Programa RACE (Research and Development in Advanced Communications Technologies for Europe): Este Programa se propone mantener a la Europa de los Doce "en punta" en el campo de las telecomunicaciones.

Programa BRITE (Basic Research in Industrial Technologies for Europe): Este Programa tiende a propiciar el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, nuevos métodos de fabricación y nuevos productos en los sectores tradicionales que siguen ocupando las tres cuartas partes del empleo industrial.

Programa de Acción de Investigación en el campo de la Biotecnología: Este Programa afecta a un sector clave, pues el 40,0% de los productos manufacturados son biológicos, o por su naturaleza o por su origen, con múltiples aplicaciones nuevas en la agricultura, la química, la farmacia, la protección del medio ambiente, etc.

Programa Eureka: Este Programa constituye un marco de acción dotado de nuevas formas de financiación y de gestión. Complementa los programas exclusivos de la Comunidad, abordando otros temas de investigación y estimulando la cooperación industrial para la puesta a punto de nuevos productos de alta tecnología.

Programa de Acción para la Educación y Formación Tecnológicas (COMETT): Este Programa tiene como objetivo promover la cooperación entre la universidad y la industria en la formación, el intercambio internacional de estudiantes, profesores y personal de las empresas, promoción de proyectos comunitarios de formación en nuevas tecnologías para empresas de varios países miembros y utilización de las técnicas audiovisuales e informáticas para la educación a distancia.

2) Política energética común

La primera acción comunitaria relevante en el área de la energía se materializó en un protocolo firmado el 21 de Abril de 1964, según el cual las Comunidades habrían de asegurar la armonización de las políticas nacionales y aplicarla en toda una serie de áreas:

- Política comercial y aprovisionamiento desde terceros países.

- Régimen de ayuda de los Estados a la industria.

- Reglas de concurrencia para evitar la discriminación según las distintas fuentes de energía.

- Racionalización de las empresas del carbón para adaptarlas a las condiciones del mercado.

En lo relativo a los hidrocarburos, los Estados Miembros se comprometieron a garantizar un aprovisionamiento suficientemente diversificado y a los precios más bajos y estables, a establecer una política común de stocks y a proceder a consultas permanentes con la Comisión de la CEE.

En cuanto a la energía nuclear se acordó desarrollar la investigación y la producción con el fin de optimizar su contribución a las necesidades comunitarias, todo ello sin perjuicio de la aplicación del Tratado Euratom.

La primera orientación para una política energética comunitaria se hizo pública el 18 de Diciembre de 1968. Este documento planteaba dos exigencias: proporcionar a la industria la energía al menor costo posible y garantizar la rentabilidad de la producción comunitaria de carbón. Conjugados esos dos prerrequisitos, se hacía una previsión



a largo plazo de las necesidades comunitarias a completar con una serie de exámenes coyunturales anuales a cargo de la Comisión, con un conjunto adicional en previsión de cualquier crisis de abastecimiento.

En realidad, las primeras tomas de posición sobre el tema energético correspondían a una época altamente dinámica de la CEE, cuando los acuerdos se adoptaban por mayoría, pero después sobrevendría la crisis institucional con la regla de la unanimidad para los "asuntos importantes" y, de hecho, la política energética común en sus aspectos operativos quedó sin instrumentar, a lo cual ciertamente contribuyó de modo decisivo la era del petróleo abundante-barato, que condujo a una intensa sustitución del carbón por los hidrocarburos.

De esta manera, cuando en Octubre de 1973 se desencadenó la crisis energética, la CEE se encontró sin verdadera política común. La crisis comunitaria se hizo aún más patente en Noviembre de 1974, cuando bajo la batuta de los Estados Unidos se creó la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Los Estados Miembros de la Comunidad ingresaron en ella, con la excepción de Francia que mantuvo su postura independiente, aunque relacionándose con la AIE a través del Comité de Energía de la OCDE.

Una situación no menos aguda de disensión se produjo en materia nuclear. En la reunión de Ministros de Energía de los Nueve en el mes de Mayo de 1973, se discutió sobre si Europa podría o no crear su propia capacidad de producción de uranio enriquecido. Entre los problemas a resolver, el crucial era la elección entre dos métodos: difusión gaseosa o centrifugación. El sistema de difusión había sido hasta 1973 el único posible, si bien a un alto costo, mientras que el de centrifugación, que podía suponer

importantes economías, todavía no se había experimentado a nivel de grandes instalaciones.

En tales condiciones dentro de la CEE surgieron dos proyectos diferentes. Cronológicamente el primero fue el EURODIF, planteado por Francia, y en el que originalmente estuvieron todos los países de la Comunidad. Su primera planta se decidió ubicarla, con una inversión equivalente a unos 2.000 millones de dólares, en Tricastín (Francia). Del otro lado, los países partidarios del sistema de centrifugación crearon el EURENCO, en el cual se integraron el Reino Unido, los Países Bajos y la República Federal de Alemania. Los socios de EURENCO entendían que las experiencias realizadas a nivel piloto permitían suponer que la centrifugación sería más económica que la difusión, por lo cual se hacía preciso dar un giro total con el fin de pasar a la nueva tecnología. En cualquier caso, lo que quedó patente fue la falta de una política común en un área de importancia fundamental.

En 1980 se hizo público el Informe Saint-Geours, así llamado por el nombre del economista francés que presidió el grupo de trabajo que lo realizó, siendo su principal conclusión la siguiente: cabe hacer frente al reto energético sin poner en peligro los valores, las tradiciones, el bienestar y las libertades a las que están apegados los europeos. En dicho Informe se puntualizaba que el desarrollo de una sociedad que economice energía no puede decidirse en una oficina de planificación, sino que requiere un alto grado de iniciativa y de responsabilidad individuales.

El grupo Saint-Geours recomendó poner en práctica una política común en el área de los precios, la investigación y las condiciones técnicas de utilización de la energía de la siguiente manera:

- Los países miembros de la Comunidad deberían llevar a cabo políticas armonizadas, tendientes a que los precios de la energía cubran el costo de sustitución de los recursos. Los costos y los precios deben ser transparentes y conocidos públicamente.

- Los programas de investigación y desarrollo deben llevarse a cabo mediante estructuras comunitarias, sin olvidar el estudio de las cuestiones económicas y sociales ligadas a la difusión y a la utilización efectiva de tales tecnologías.

- Deberían establecerse normas por acuerdos voluntarios o disposiciones legales para los automóviles, las instalaciones de calefacción y los principales aparatos electrodomésticos, tanto para la producción comunitaria como para las importaciones.

- El grupo pidió a la Comisión Europea un clima favorable a la inversión y a la innovación, para hacer del ahorro de energía un "buen negocio", lo cual también originaría nuevos puestos de trabajo.

Ahorro de energía

En buena medida, la creación de condiciones para el ahorro de energía es cuestión que aún compete a los gobiernos nacionales, que han venido poniendo en práctica programas concretos que permitieron entre 1974 y 1977 reducir el consumo energético de los países miembros en aproximadamente un 8,0%.

La Comisión propuso a los países miembros nuevos programas de ahorro de energía, de manera tal que a una expansión económica de un 1,0% sólo le correspondiera un aumento del consumo energético del 0,8% hasta 1985 y del 0,7% hasta 1990. Asimismo,

estableció un programa general, dejando a cada uno de los países miembros la libre elección de sus prioridades en función de las situaciones nacionales.

Energías alternativas

Después de la primera crisis energética, la Comunidad Económica Europea dió un considerable impulso a sus programas de investigación y desarrollo de nuevas energías.

En materia de "evaluación de la radiación solar", a comienzos de 1981 se publicó un atlas de las radiaciones solares en Europa mes a mes. En el área de las aplicaciones a la calefacción y a la refrigeración de inmuebles, los investigadores proceden sobre todo a la valoración del rendimiento de los colectores solares (térmicos o fotovoltaicos), esforzándose por resolver el problema del almacenaje del calor en previsión de días o semanas sin sol.

En materia de "centrales térmicas solares", la Comunidad inauguró en 1981 en Adrano (Sicilia) una central solar con una potencia de un megawatio. Al propio tiempo se avanza en la investigación de la conversión fotovoltaica, que permite transformar luz solar directamente en electricidad por medio de células semiconductoras, procedimiento que reviste gran interés para Europa, dado que las células funcionan incluso con cielo encapotado. La Comunidad está haciendo esfuerzos para reducir el precio de las células y aumentar su rendimiento, con el fin de lograr centrales solares competitivas.

Con apoyo comunitario ciertos laboratorios están investigando "sistemas fotoquímicos" que imitan el

proceso natural de la fotosíntesis. También se está investigando como disociar el agua (gracias a la energía solar) en oxígeno e hidrógeno, para a continuación utilizar este último como combustible sintético.

Es importante también el proceso investigador sobre la "biomasa". El término biomasa o combustible verde sirve para designar las materias orgánicas (paja, residuos de cosecha, maleza, estiércol, algas) nacidas de la fijación de la energía solar por la fotosíntesis, que pueden transformarse en energía por gasificación o por fermentación para producir alcohol. Puede reemplazar al petróleo en todas sus aplicaciones (el metanol puede mezclarse con la gasolina) y se estima que a corto plazo podría cubrir el 5,0% de las necesidades energéticas de la Europa comunitaria.

La "geotermia de alta energía" es otra fuente alternativa de indudable interés. Las perforaciones en zonas particularmente cálidas de la corteza terrestre (regiones volcánicas) permiten obtener agua a más de 150°, que sirve para accionar turbinas con vistas a la producción de electricidad. La Comunidad presta desde el año 1981 su apoyo a una perforación de gran profundidad.

En lo que respecta a la "geotermia de baja energía", se trata de bombear las aguas calientes o tibias de las capas subterráneas para caldear viviendas o invernaderos. Cuanto más profundas están las capas acuíferas más caliente está el agua, pero también es más salada y resulta más corrosiva. Por ello mismo, la Comunidad tiene especial interés en la investigación de un convector que en el futuro

permitiría calentar locales con agua a 40° que se encuentra con gran frecuencia.

Energía de fusión

Teniendo en cuenta las ventajas potenciales que la fusión tendría para Europa por la autonomía de abastecimiento, la seguridad de funcionamiento, la protección del medio ambiente, y la contribución al progreso tecnológico, y considerando las enormes dificultades de su consecución, los países de la Comunidad decidieron integrar los esfuerzos nacionales en un único programa europeo, susceptible de contener y coordinar las actividades de todos los laboratorios especializados de los países miembros. Responsable plena de la ejecución del programa, la Comisión Europea cuenta con la ayuda de un Comité Consultivo del Programa de Fusión integrado por expertos nacionales.

Por otra parte, se ha creado una empresa comunitaria para el Proyecto JET (Joint European Torus) y el carácter colectivo de tal aventura conjunta de los Doce ha quedado consagrado en numerosas decisiones del Consejo de Ministros de la Comunidad, que describe al Programa Comunitario de Fusión como "un elemento de colaboración a largo plazo, que cubre la totalidad de las actividades emprendidas en el sector de la fusión termonuclear controlada por los Estados Miembros. Aspira a desembocar, en tiempo oportuno, en la realización en común de prototipos destinados a su industrialización y comercialización". Se trata de un compromiso que, tanto en el espacio como en el tiempo, carece de precedentes en la historia de la cooperación científica internacional.

La evolución del programa europeo puede resumirse poniendo de relieve que en los años 60, los problemas que se abordaron prioritariamente fueron los métodos de confinamiento magnético y, en menor grado, de calentamiento del plasma. Para estimular la actividad de los laboratorios nacionales, el nivel de ayuda financiera de la Comunidad aumentó del 25,0% hasta el 45,0% para las inversiones de capital necesarias en grandes equipos experimentales de interés común.

La década de los setenta se caracterizó por la construcción de varias máquinas, siempre en la línea del tokamak soviético. Punto culminante de este período fue el diseño y comienzo de la construcción del JET, primer proyecto mundial de gran máquina experimental de fusión. Su realización fue resultado de los esfuerzos conjuntos de gran número de laboratorios y de la propia Comunidad, que concurrió con el 80,0% de la inversión.

Después, los años 80 están marcados, hasta ahora, por realizaciones científicas y técnicas que sitúan al programa europeo en la punta de lanza de la investigación mundial sobre fusión. Su objetivo final consiste en la construcción de un reactor de demostración (DEMO) que debería probar de forma satisfactoria su capacidad de producir electricidad. Además, el DEMO debería proporcionar el modelo de una alimentación de tritio realizada en condiciones óptimas de seguridad y fiabilidad.

Entre el JET y el DEMO hay un profundo foso que espera franquear en una sola etapa el New European Torus (NET) que es el nuevo objetivo a mediano plazo del programa.

Como se hizo para el JET hace años, se ha creado un grupo de estudios para definir las especificaciones del NET, en Garchin, República Federal de Alemania. La experiencia y los resultados obtenidos con el funcionamiento del JET, las máquinas de dimensión intermedia ya instaladas o en construcción y los previsibles avances tecnológicos, permitirán acometer los trabajos de diseño del NET.

Proyectos de demostración en el área energética

Los proyectos de demostración deben conceptuarse como realizaciones industriales a desarrollar a escala real, con perspectivas serias de viabilidad técnica y económica. Los campos cubiertos por estos proyectos son los siguientes: ahorro de energía, energías alternativas, sustitución de hidrocarburos, licuefacción y gasificación de combustibles sólidos. Así, al ofrecer a esta clase de proyectos ambiciosos y bien seleccionados un apoyo financiero que resulta decisivo para su realización, la Comunidad contribuye a la solución de los problemas energéticos de Europa y al mismo tiempo, contribuye a la modernización tecnológica en general.

La ayuda comunitaria puede ascender hasta el 40,0% del costo global de cada proyecto y si éste se beneficia además de una ayuda nacional, el total de la ayuda pública no podrá superar el 49,0%.

En el campo del ahorro de energía el avance de los proyectos de demostración ha sido el siguiente:

Construcción: La Comunidad aporta ayudas para la puesta a punto de métodos y productos destinados a nuevas edificaciones. También se interesa por

tecnologías sencillas y económicas destinadas a edificaciones ya existentes: calefacción, acondicionamiento de aire, aislamiento, agua caliente, control de temperaturas y recuperación de calor. El programa comunitario ha tenido varios éxitos. En Groninga, Países Bajos, la empresa Gasunir ha demostrado que se podía rebajar en un 73,0% los gastos de iluminación central de baja intensidad con lámparas de mesa individuales. En Skive, Dinamarca, se construyeron 53 viviendas con el consumo de energía más parco del mundo, combinando un sofisticado aislamiento, colectores solares, bombas de calor, calderas de fuel, estufas de madera y un control electrónico de la temperatura, consiguiéndose de esa manera un ahorro del 50,0% sobre las ya exigentes normas danesas de 1977.

Industria: Entre las experiencias concluyentes mencionaremos la de la empresa Fertimonto de San Giuseppe de Cairo, Italia, que logró reducir en un 40,0% su consumo de vapor en la producción de úrea sintética para la fabricación de abonos. Otro ejemplo lo constituye la papelera Beghin-Say de Corbehem, Francia, donde una bomba de calor por agua permite utilizar los vapores producidos durante el proceso de fabricación.

A medio camino entre el ahorro de energía y la utilización de residuos, la empresa Deborah Fluidised Combustion de Peterlee, Reino Unido, construyó un lecho fluidizado capaz de quemar residuos contaminantes de alquitrán, produciendo vapor y eliminando todo residuo inerte. En la siderurgia, sector de gran consumo de energía, las empresas Thyssen y Usinor (República Federal de Alemania y

Francia respectivamente) han llevado a cabo proyectos que permiten recuperar importantes cantidades de gases residuales y combustibles que antes se lanzaban a la atmósfera.

Transporte: La tecnología puesta a punto por Alfa Romeo ha permitido reducir en un 12,0% el consumo de gasolina en una flota de taxis en Milán, equipándola con un motor que utiliza alternativamente dos o cuatro cilindros, según la potencia necesaria en cada momento. En Francia, la SNCF ha demostrado la posibilidad de reducir el consumo de los trenes tradicionales, dotándolos de un carenado más aerodinámico. Un buque provisto de la turbovela Cousteau-Milavard será explotado en rutas comerciales utilizando la energía eólica como fuerza complementaria.

Producción de energía: En este sector, la Comunidad se interesa en varias cuestiones, como ser la mejora de la distribución de gas, métodos económicos de producción de calor o electricidad destinados a usos colectivos, utilización del calor residual, nuevos conceptos de calefacción urbana y de barrio, y puesta a punto de grandes bombas de calor. Dos bombas de este tipo, que utilizan como fuente de calor las instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales, garantizan parcialmente la calefacción de las ciudades de Frederikshavn (Dinamarca) y Waiblingen (República Federal de Alemania).

En el capítulo de las energías alternativas, los proyectos de demostración han alcanzado un cierto desarrollo de acuerdo al siguiente detalle:

Biomasa y residuos: Entre los proyectos de mayor éxito se encuentran el de la Asociación Intercomunal Intradel de Lieja, Bélgica, para el reciclado de residuos de plástico, un proyecto danés instalado en Viborg, que permite extraer biogás de un vertedero, un proyecto de digestión anaeróbica de los residuos de un criadero de aves con producción de biogás y "compost" en Cerdeña y un proyecto de fabricación de una máquina para la recogida de los sarmientos de la vid en Módena, ambos en Italia.

Energía solar: Entre 1978 y 1985 la Comunidad concedió 33 millones de ECUs para la realización de 18 proyectos de energía solar. Entre otros éxitos, cabe mencionar la fábrica Pernod de Lyon-Dardilly, Francia, donde paneles solares de circulación de aire, cerramientos acristalados, bombas de calor y un sistema de almacenamiento de calorías, se combinan para calentar 10.000 metros cuadrados de oficinas y talleres, y el agua de los servicios (50,0% de ahorro en comparación con el consumo normal). En Inzell, República Federal de Alemania, se ha construido un complejo de piscinas no cubiertas que mantienen una temperatura de 24° mediante paneles solares.

Energía geotérmica: Entre 1978 y 1985 se concedieron en total 48 millones de ECUs para la realización de 92 proyectos geotérmicos. Varios de ellos para calefacción urbana de locales en Ferrara, Italia, y en las poblaciones francesas de Beauvais, Clergy-Pontoise y Burdeos. También en Francia, en Lamazere, se calientan con energía geotérmica ocho hectáreas de invernaderos.

Energía eólica: Entre 1983 y 1985 la Comunidad concedió 20 millones de ECUs para la realización de 80

proyectos eólicos. Entre los primeros resultados hay que citar las tres centrales eólicas conectadas a la red eléctrica nacional e instaladas en Masned (Dinamarca), Ilfracombe (Reino Unido) y Medemblik (Países Bajos), alcanzando esta última una potencia de un megawatio. Se destaca también una instalación eólica que mantiene la temperatura de un invernadero del Instituto Irlandés de Agricultura.

Energía hidroeléctrica: Los recursos hidráulicos de baja potencia (menos de 3.000 kw) y en general, de escasa caída, no carecen de interés, ya que la Comunidad pretende ampliar la acción emprendida en este sector en 1984, siendo los objetivos prioritarios el mejorar y normalizar equipos, utilizar nuevos materiales, modernizar las técnicas de control y de gestión, aumentar la rentabilidad y respetar el medio ambiente.

Licuefacción y gasificación de combustibles sólidos: La sustitución del petróleo por productos de la licuefacción y gasificación de combustibles sólidos, constituye igualmente un objetivo primordial de cara a las exigencias de diversificación energética y de reducción de la dependencia externa. Entre 1978 y 1985 la Comunidad concedió 151 millones de ECUs para 38 proyectos de este tipo, intentando la mayoría de ellos transformar el carbón en productos gaseosos para servir de materia prima a gran parte de la industria química, o bien utilizarse en la producción de electricidad en un ciclo combinado de turbinas a gas y a vapor. Otros proyectos se dedican a la conversión del carbón en productos líquidos, una de las pocas alternativas al petróleo para motores de automóvil. Por último, se apunta a una perspectiva más lejana,

como ser la gasificación subterránea de las importantes reservas de carbón a grandes profundidades que aún posee la Comunidad y que actualmente son imposibles de explotar.

BIBLIOGRAFIA

UN ESPACIO FINANCIERO

Serie DOCUMENTACION EUROPEA

Año 1989

LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL DESARROLLO RURAL

Serie DOCUMENTOS EUROPEOS

Año 1991

POLITICA DE MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Serie DOCUMENTACION EUROPEA

Año 1990

LA COMUNIDAD EUROPEA

Ramón Tamames

Año 1987

UNA POLITICA AGRARIA COMUN PARA LOS AÑOS NOVENTA

Serie DOCUMENTACION EUROPEA

Año 1989

REDES TRANSEUROPEAS PARA UNA COMUNIDAD SIN FRONTERAS

Transporte, energía, telecomunicaciones, formación profesional

Serie DOCUMENTOS EUROPEOS

Año 1991

EUROPA 92 Y LA ECONOMIA LATINOAMERICANA

Miguel Izam

Revista de la CEPAL Número 43

Año 1991

LA POLITICA DE COMPETENCIA EN EL MERCADO UNICO

Serie DOCUMENTACION EUROPEA

Año 1989

LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR

Serie DOCUMENTOS EUROPEOS

Año 1990